

EN LO PRINCIPAL: Recurso de Reposición; **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos; **SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña personería.

Superintendencia de Medio Ambiente

Rodrigo Núñez Arenas, cédula de identidad N° 12.583.946-0 y **Felipe Ibarra Argelery**, cédula de identidad N° 9.979.778-9, ambos en representación de Instituto Profesional AIEP SpA, en autos administrativo sancionatorio iniciado mediante Resolución Exenta N°1/ROL D-121-2020, ante esta Superintendencia, de fecha 9 de septiembre de 2020, al Señor Superintendente de Medio Ambiente respetuosamente decimos:

Que, dentro de plazo, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la Ley N°20.417, venimos en deducir recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°1229, de fecha 8 de junio de 2021, notificada a esta parte con fecha 9 de junio del año en curso, en virtud de lo que se expresa a continuación:

Lo resuelto:

De acuerdo a lo señalado en la Resolución Exenta N°1229, esta Superintendencia resolvió aplicar al Instituto Profesional AIEP SpA una multa de diecisiete Unidades Tributarias Anuales (17 UTA), fundándose en los hechos descritos en la formulación de cargos contenida en la Resolución Exenta N°1/Rol D-121-2020, esto es, *“La obtención, con fecha 03 de noviembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 53 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona III.”*, en virtud de lo cual esta Superintendencia consideró que se ha configurado el incumplimiento de una norma de emisión, en este caso el D.S. N° 38/2011 del MMA, por lo que se tiene a su vez configurada la infracción y consecuentemente la aplicación de la multa.

La Reconsideración:

Por este acto, venimos en solicitar reposición de lo resuelto, en los términos que se indican a continuación, en atención a los siguientes argumentos y fundamentos:

- La fiscalización a la que se refiere la resolución se remonta a más de 3 años atrás, con lo cual el levantamiento de los antecedentes para defender las observaciones se hace, a lo menos, muy difícil, afectando el derecho a la defensa del Instituto.
- Lo anterior se complica más aún por el hecho que, como fuera mencionado en los descargos, el Instituto Profesional AIEP ya no tiene relación con el inmueble en cuestión y que formaba en ese entonces parte de su Sede Barrio Universitario, en el Edificio Abdón Cifuentes. Al respecto, con fecha 30 de diciembre de 2019, el Instituto cedió y transfirió la totalidad de los derechos, acciones, deberes y obligaciones que le correspondían como subarrendatario respecto del inmueble, tal como se puede evidenciar en los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación. Ante ello, es necesario que esta Superintendencia pueda tener a la vista dichos documentos para la reconsideración en el valor de la multa, ya que mediante estos se permite acreditar la situación

actual en que se encuentra el inmueble, más aún, cuando en los hechos es la propiedad que fue generadora de ruido. Cabe destacar que estos antecedentes también se acompañaron en la formulación de los descargos, para efectos de cooperar y de entregar toda la información disponible; sin embargo, atendida la fecha de ocurrencia de los hechos y en atención a que la Institución ya no es titular del inmueble, no fue posible acompañar más antecedentes, en especial respecto de aquellos que permitan identificar las maquinarias generadoras de ruido que se encontrasen dentro de la unidad fiscalizable o el plano con la ilustración en donde se encuentran estas, ya que son documentos que esta parte no tiene actualmente en su poder producto de la cesión. Es por eso que la no presentación de estos, no debiese ser un fundamento para aumentar el valor de la multa, tal como se señaló en el punto 105 de la resolución.

- La consideración anterior es de suma relevancia para la aplicación de una multa, pues al no tener relación con el inmueble, mal podrían implementarse por ella medidas de mitigación a la fecha de la presente resolución, haciendo inaplicable hablar de la obtención de un beneficio económico durante el tiempo señalado según se indica en la resolución. Respecto a este punto, cabe destacar que de acuerdo a lo señalado la letra c) del artículo 40 de la ley 20.417, se indica que el beneficio económico es una circunstancia a considerar para determinar la sanción, disposición que esta Superintendencia hace referencia al señalar en el punto 66 de la resolución que *“respecto de los costos asociados a la implementación de medidas de mitigación que no han sido ejecutadas a la fecha de la presente resolución, bajo un supuesto conservador para efectos de la modelación, se considera que estos son incurridos en la fecha estimada de pago de multa, configurando un beneficio económico por el retraso de estos costos hasta dicha fecha”* y en el punto 67 al señalar que para la determinación del beneficio económico *“se consideró una fecha de pago de multa al 30 de junio de 2021”*. Es por ello, que para la aplicación de la presente circunstancia, era necesario también considerar los hechos expuestos por esta parte, en orden a que con fecha 30 de diciembre de 2019, la Institución ya no era titular del inmueble y consecuentemente no podría haber incurrido en un incumplimiento que reporte tal beneficio en todo ese período.
- La resolución señala que el incumplimiento se habría dado por haberse constatado en el lugar niveles de presión sonora por un valor de 53 db(A), esto es, excediendo solo en 3 db(A) el valor autorizado. Este valor en exceso, en opinión de esta parte, no se condice con el alto monto de la multa aplicada, la que resulta excesiva. La presente circunstancia dice relación con el daño causado o el peligro ocasionado, que se encuentra regulado en la letra a) del artículo 40 de la ley 20.417, y que para el presente caso esta parte estima que la superación de los niveles de presión sonora no son de carácter significativo en comparación al valor de la multa que se determinó aplicar, tomando en consideración que el mínimo para el caso de las infracciones leves, de acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la LOSMA, es de una UTA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 55 y 56 de la Ley N°20.417 y a los antecedentes expuestos.

Respetuosamente pedimos, al Sr. Superintendente de Medio Ambiente, tener por interpuesto el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°1229, de fecha 8 de junio de 2021, acogerlo en todas sus partes, y en definitiva se sirva a modificar la resolución, rebajando al mínimo la sanción aplicable a las infracciones leves como la materia de la Resolución impugnada, esto es, amonestación por escrito o, en subsidio, la rebaja significativa de la multa que esta Superintendencia determine, en mérito de los argumentos y antecedentes aportados.

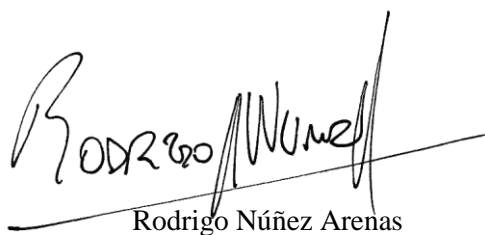
PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañado los siguientes documentos para efectos de acreditar lo expuesto en esta presentación:

- Cesión de contrato de Subarrendamiento, de fecha 30 de diciembre de 2019.
- Acta de entrega del Inmueble de fecha 6 de enero de 2020.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase tener presente que la personería para actuar en representación de Instituto Profesional AIEP SpA, consta en escritura pública de 21 de diciembre de 2020 otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Cifuentes Allel, cuya copia se acompaña a esta presentación.



Felipe Ibarra Argelery



Rodrigo Núñez Arenas

CESIÓN DE CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA

A

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO

En Santiago de Chile, a 30 de diciembre de 2019, entre **INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA**, sociedad por acciones del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 96.621.640-9, debidamente representada por don **Carlos Silva Sánchez**, cédula de identidad N° 11.633.601-4, y doña **Patricia Cabello Pedrasa**, cédula de identidad N° 5.208.935-6, ambos domiciliados en Avenida Santa María N° 0792, Providencia, en adelante también, indistintamente, “**AIEP**” o “**la Cedente**”; la **UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO**, Corporación de Educación Superior, Rol Único Tributario número 71.540.100-2, debidamente representada por los señores **Raúl Peralta San Martín**, cédula de identidad nacional número 11.837.615-3, y **Alejandro Zamorano Jones**, cédula de identidad nacional número 10.890.605-7, todos domiciliados para estos efectos en calle República número 252, comuna y provincia de Santiago, región Metropolitana de Chile, en adelante “**la Universidad**”, “**UNAB**” o la “**Cesionaria**”; y **UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS**, Corporación de Educación Superior, Rol Único Tributario número 71.540.800-7, representada por don **Alejandro David Merajver**, cédula de identidad N° 21.202.159-8, y doña **María Loreto Ferrari Bodelon**, cédula de identidad N° 9.686.600-3, todos domiciliados en Antonio Varas 980, comuna de Providencia, en adelante “**UDLA**”; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas expuestas y exponen:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

- A) Por medio de instrumento privado de fecha 01 de agosto de 2005, Inmobiliaria Educacional SpA entregó en arrendamiento a UDLA parte del Inmueble (13.529,35 metros cuadrados) ubicado en calle Echaurren número 148, comuna de Santiago, que también tiene acceso por calle Abdón Cifuentes N°115, comuna de Santiago, en adelante el “Inmueble”.
- B) Por su parte, por medio de instrumento privado de fecha 01 de marzo de 2009 y posteriores modificaciones, Inmobiliaria Educacional SpA entregó en arrendamiento a Instituto Profesional AIEP SpA (“AIEP”) otra parte del Inmueble (2.337,02 metros cuadrados) ya individualizado en letra A anterior.
- C) Posteriormente, los inmuebles descritos en las cláusulas anteriores fueron adquiridos por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. (“Penta”), y cuyas inscripciones rolan inscritas a fojas 82.323, número 124.494 del año 2013.

- D) Mediante escritura pública de fecha 3 de diciembre de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, Penta e Inmobiliaria Educacional SpA celebraron un contrato de arrendamiento, en adelante el “Contrato de Arrendamiento”, en virtud del cual Penta entregó en arriendo a Inmobiliaria Educacional SpA el Inmueble ya individualizado.
- E) Mediante instrumento público de Cesión de Contrato de fecha 27 de diciembre de 2018, otorgado en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, IESA cedió a UDLA, con la debida aprobación de Penta en dicho instrumento, el Contrato de Arrendamiento, pasando de dicha forma UDLA a ser el único arrendatario del Inmueble frente a Penta.
- F) Debido a lo anterior, por medio de instrumento privada de Cesión de Contrato de subarrendamiento de fecha 31 de diciembre de 2018, UDLA e IESA acordaron que la primera seguiría directamente con el contrato de subarrendamiento de AIEP indicado en la letra B).

SEGUNDO: CESIÓN: Por el presente acto, AIEP, debidamente representada, en su calidad de actual subarrendatario, cede y transfiere a Universidad Andrés Bello, para quien expresamente aceptan sus representantes, la totalidad de los derechos, acciones, facultades, deberes y obligaciones que le corresponden como subarrendatario en el Contrato de Subarriendo señalado en la letra B de la cláusula primera anterior, con efecto desde el día **01 de enero del año 2020**, razón por la cual, la cesionaria declara expresamente que:

- i. En este mismo acto, recibe copia legalizada del Contrato de subarrendamiento a su entera y completa satisfacción y conformidad, el que sirve de título de los derechos y obligaciones que se transfieren por el presente instrumento.
- ii. Adquiere las obligaciones que, del referido contrato de subarrendamiento emanaban para AIEP.

TERCERO: En consideración a la cesión de derechos establecida en la cláusula anterior, UNAB se subroga íntegra y totalmente frente a UDLA a contar del **01 de enero de 2020**, frente a la posición contractual que AIEP tenía en el referido contrato de subarrendamiento, declarando en este acto que se obliga a dar cumplimiento íntegro a todas y cada una de las obligaciones que le correspondían a AIEP en el mismo, así como conocer todas y cada una de sus estipulaciones. En consecuencia y en adelante, cualquier referencia a AIEP en el contrato de subarrendamiento significa que hace mención a UNAB. Como consecuencia de lo anterior, la cedente y la cesionaria declaran que el contrato de subarrendamiento individualizado en la cláusula letra B) de la Cláusula Primera anterior, permanece íntegramente vigente en todas sus partes, con la sola excepción de que a partir del día 01 de enero de 2020, la subarrendataria de dicho contrato pasa a ser UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO.

CUARTO: PRECIO DE LA CESIÓN: La presente cesión tendrá el carácter de gratuita, razón por la cual no existe al respecto ningún pago asociado ni deuda exigible por parte de la cedente a la cesionaria.

QUINTO: FINIQUITOS: En virtud de la cesión que da cuenta el presente instrumento, Universidad de las Américas e Instituto Profesional AIEP vienen en otorgarse el mas amplio, completo y reciproco finiquito en relación con el contrato de subarrendamiento que por el presente instrumento se cede, declarando a mayor abundamiento que nada se adeudan ni tienen cargo alguno que formularse por ningún concepto o causa.

SEXTO: De esta forma y en virtud de la cesión efectuada, Universidad de Las Américas se relaciona a contar del 01 de enero de 2020, única, exclusiva y directamente con UNAB, quien en virtud de la cesión adquirió todos los derechos y obligaciones que anteriormente tenía AIEP en el contrato de subarrendamiento.

SÉPTIMO: Por este acto, Universidad de Las Américas, debidamente representada, declara que acepta la cesión de derechos efectuada entre AIEP y Universidad Nacional Andrés Bello, con efecto a contar del día 01 de enero de 2020, conforme da cuenta la presente clausula reconociendo como única subarrendataria del inmueble a contar de dicha fecha a Universidad Nacional Andrés Bello.

OCTAVO: Todos los impuestos, derechos notariales y demás que origine la suscripción del presente instrumento serán pagados íntegramente por AIEP y UNAB, por mitades.

NOVENO: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO: Las partes declaran y garantizan cumplir con el Código de Ética para proveedores publicado en la página web de la Universidad, así como también con la normativa aplicable a las leyes 20.393 y 21.121 y sus modificaciones y ampliaciones, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos de Lavado de activos, Financiamiento del terrorismo, Cohecho de funcionario público nacional o extranjero, Receptación, Negociación incompatible, Administración desleal, Corrupción entre privados (soborno) y apropiación indebida.


Junto con lo anterior, INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA y UNIVERSIDAD LAS AMÉRICAS se comprometen a cumplir con el Modelo de Prevención de Delitos vigente de la UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO y a denunciar los hechos o actividades sospechosas que lleguen a su conocimiento a través de los canales oficiales de denuncias y su línea de denuncias www.unabcentrodeayuda.cl

PERSONERÍAS. Las personerías no se citan ni insertan por ser conocidas por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, los apoderados declaran que actúan por sus representadas en virtud de poderes legalmente constituidos y que se encuentran vigentes, con facultades suficientes para obligar a sus representadas, y se obligan a indemnizar a sus contrapartes

por todos los perjuicios que le ocasionaren en caso de haber comparecido sin personería legal suficiente.




Carlos Silva Sánchez
p.p. INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA



Patricio Cabello Pedrasa



Raúl Peralta San Martín
p.p. UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO



Alejandro Zamorano Jones



Alejandro David Merajver
p.p. UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

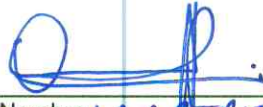


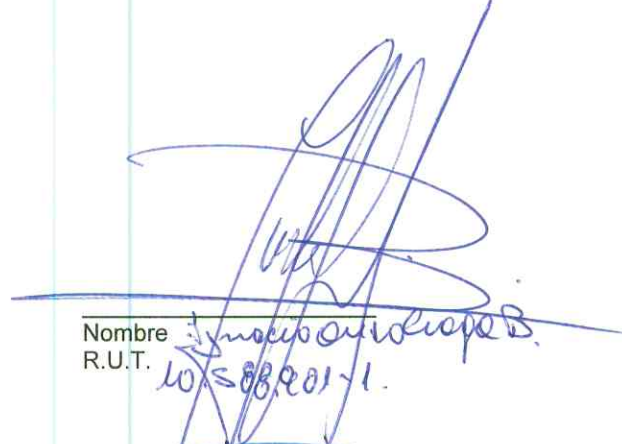
María Loreto Ferrari Bodelon

ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLE


En Santiago, en el día 06 de enero del 2020, **Instituto Profesional AIEP SpA** representado en este acto de entrega por quien firma el pie de página, hace entrega del Inmueble ubicado en Calle "Abdón Cifuentes 115" a **Universidad Andrés Bello**, representado por quien firma al pie de página, quien manifiesta que ha recibido a entera satisfacción el bien inmueble antes señalado en conformidad estado de cuenta de los servicios públicos, cuotas de administración, vigilancia y/o propiedad horizontal. Igualmente declaro(amos) conocer y aceptar la(s) reglamentación(es) a la(s) que está(n) sometido(s) el(los) bien(es) en materia de urbanismo, medio ambiente, ordenamiento territorial, destinación, uso de suelos, entre otros, sin limitación.


Entrega:
Instituto Profesional AIEP SpA


Nombre María de los Angeles
R.U.T. 15.372.927-1


Nombre Juan Carlos López B.
R.U.T. 10.588.901-1

Recibe:
Universidad Andrés Bello

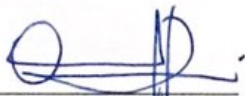

Nombre MARCELA ARANDA
R.U.T. 13.463.593-2


Nombre FRANCISCO BENAVIDES
R.U.T. 16606231-4

ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLE

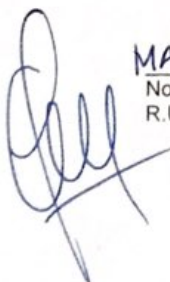
En Santiago, en el día 06 de enero del 2020, **Instituto Profesional AIEP SpA** representado en este acto de entrega por quien firma el pie de página, hace entrega del Inmueble ubicado en Calle "Abdón Cifuentes 115" a **Universidad Andrés Bello**, representado por quien firma al pie de página, quien manifiesta que ha recibido a entera satisfacción el bien inmueble antes señalado en conformidad estado de cuenta de los servicios públicos, cuotas de administración, vigilancia y/o propiedad horizontal. Igualmente declaro(amos) conocer y aceptar la(s) reglamentación(es) a la(s) que está(n) sometido(s) el(los) bien(es) en materia de urbanismo, medio ambiente, ordenamiento territorial, destinación, uso de suelos, entre otros, sin limitación.

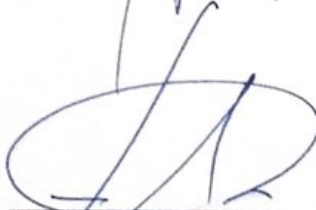
Entrega:
Instituto Profesional AIEP SpA


Nombre Ivan del Real
R.U.T. 16.572.924-1


Nombre Juan Carlos López
R.U.T. 10.588.901-1

Recibe:
Universidad Andrés Bello


Nombre MARCELA ARANDA
R.U.T. 13.463.593-2


Nombre Francisco Benavides
R.U.T. 16606231-4

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado "102 SESION DE DIRECTORIO" es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 21-12-2020 bajo el Repertorio 11412.



Gustavo Alfredo Montero Marti
Notario Suplente

Firmado electrónicamente por Gustavo Alfredo Montero Marti, Notario Suplente de la 48° Notaria de Santiago, a las 14:18 horas del día de hoy.

Santiago, 22 de diciembre de 2020





YBV. REPERTORIO N°11.412/2020

OT:209.383



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.notariosyconservadores.cl o www.cbrchile.cl con el siguiente código: **2020209383**

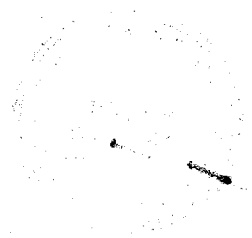
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiuno de Diciembre de dos mil veinte de dos mil veinte, ante mí, GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, según Decreto número seiscientos cuarenta y nueve - dos mil veinte, de la Presidencia de la Corte de Apelaciones, Rol Pleno número mil veinticinco de fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte, protocolizado al final de los Registros del mes de diciembre del mismo año, comparece: JOAQUÍN ALFREDO RECART APFELBECK, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número quince millones seiscientos treinta y seis mil trescientos noventa y seis guión cero, domiciliado en Avenida Andrés Bello dos mil setecientos once, piso ocho, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada, y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta de





SESIÓN DE DIRECTORIO de INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA, celebrada con fecha **once de septiembre de dos mil veinte**, y declara que ésta se encuentra firmada por los señores Jorge Selume Zaror, Presidente; José Pedro Undurraga Izquierdo, Director; Raúl Peralta San Martín, Director; Gonzalo Guzmán Ilic; Director; Juan Antonio Guzmán Molinari, Secretario; y que ésta se encuentra adherida al libro de actas de la Sociedad, cuyo tenor es el siguiente: " En Santiago de Chile, a once de septiembre del año dos mil veinte, a las veinte cuarenta horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso ocho, comuna Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se da comienzo a la Sesión de Directorio de **INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA**, en adelante la "Sociedad".

I. ASISTENCIA: Participan los directores José Pedro Undurraga Izquierdo, Jorge Selume Zaror, Juan Antonio Guzmán Molinari, Raúl Peralta San Martín y Gonzalo Guzmán Ilic, a través de video conferencia.

II. TABLA: uno. Constitución del Directorio; dos. Designación del Presidente y del Secretario del Directorio; tres. Revocación de poderes; y cuatro. Designación de apoderados y otorgamiento de nuevos poderes.

_uno. Constitución del Directorio. El señor Jorge Selume Zaror indica que, en junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con esta fecha, se informó de la renuncia de todos los directores de la Sociedad, y se eligió a los nuevos integrantes del directorio, señores Raúl Peralta San Martín, Gonzalo Guzmán Ilic, Juan Antonio Guzmán Molinari, José Pedro Undurraga Izquierdo y Jorge Selume Zaror, quienes por este acto se constituyen como Directorio.

dos. Designación del Presidente y del Secretario del Directorio. El señor Jorge Selume Zaror señala que por ser esta la primera sesión después de la elección del Directorio, corresponde, de acuerdo a la ley, designar al Presidente del Directorio. El Directorio designa como Presidente del mismo y de la Sociedad a Jorge Selume Zaror, quien agradeció su nombramiento; y como secretario, a Juan Antonio Guzmán Molinari, quien igualmente agradeció su nombramiento.

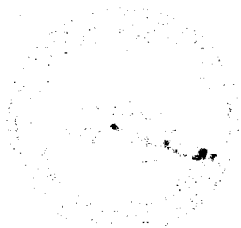
_tres.



Revocación de Poderes. A continuación, el Presidente señala que es necesario revocar todos los poderes otorgados por la Sociedad. El Directorio acuerda revocar todos los poderes conferidos por la Sociedad con anterioridad a esta fecha, en especial aquellos que constan en la Sesión de Directorio de la Sociedad celebrada con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha tres de agosto de dos mil veinte en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores. **cuatro. Designación de apoderados y otorgamiento de poderes.**

Luego, el Presidente indica que es necesario conferir nuevos poderes para representar a la Sociedad a partir de esta fecha. En virtud de lo anterior, el Directorio acuerda designar a las siguientes personas como apoderados Clase A y Clase B. a) **Apoderados Clase A:** José Pedro Undurraga Izquierdo, Fernando Andrés Martínez Santana, Patricia Cabello Pedrasa, Juan Pablo Muñoz Díaz, Felipe Andrés Ibarra Argelery, Pedro Covarrubias Besa y Raúl Peralta San Martín. b) **Apoderados Clase B:** Rodrigo Andrés Núñez Arenas, Marcela Vaccaro Rivera y José Antonio Álvarez De Toledo y Mella. El Directorio acordó, por unanimidad, que los apoderados de la Sociedad indicados anteriormente y actuando según se indica más adelante, estarán investidos de una o más de las facultades que a continuación se enumeran, sin perjuicio de aquellas otras que expresamente les sean conferidas o de que estén investidos de conformidad con la ley o con los estatutos sociales: **uno.** Contratar, abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extranjera; **dos.** Girar y sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de cargos en cuenta corriente y de no pago, mediante procedimientos computacionales, cibernéticos, telefónicos y cualesquiera otros; **tres.** Girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques y otros documentos a la vista; **cuatro.** Retirar talonarios de cheques, solicitar y reconocer saldos y cartolas; **cinco.** Abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a plazo y realizar depósitos y retiros o





giros en las mismas; **seis**. Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar y cancelar letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier clase de instrumentos negociables o efectos de comercio; **siete**. Contratar toda clase de operaciones de crédito, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, con o sin interés, especialmente con Bancos e Instituciones Financieras, el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito nacionales y extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial aquellas a que se refiere la Ley dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de aperturas de líneas de créditos, préstamos o mutuos, préstamos con letras o avances contra aceptación o contra valores, descuentos, créditos o avances en cuenta corriente, u otras operaciones de crédito de dinero; **ocho**. Abrir en Bancos e Instituciones Financieras, por cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables o irrevocables, divisibles o indivisibles, confirmados o no confirmados; **nueve**. Autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin; **diez**. Operar en forma amplia en el mercado de capitales y de inversiones; **once**. Adquirir, ceder, transferir, traspasar y realizar cualquier clase de actos u operaciones sobre derechos en fondos mutuos de cualquier tipo; **doce**. Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones; **trece**. Entregar y retirar bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranza o garantía; **catorce**. Arrendar cajas de seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre, y poner término a su arrendamiento; **quince**. Realizar toda clase de operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones de toda clase de bienes, abrir y modificar registros o informes de exportación y anexos a los mismos, pudiendo firmar todos los documentos necesarios para tales efectos; **dieciséis**. Retirar mercaderías de aduanas; **diecisiete**.



Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile y bancos comerciales en todo lo relativo a comercio exterior; **dieciocho**. Firmar, entregar, negociar, retirar y endosar conocimientos de embarque, guías de despacho, cartas de porte o cartas guías relativas al transporte terrestre, aéreo o marítimo; **diecinueve**. Realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial comprar y vender y, en general, enajenar divisas, de contado o a futuro, provengan del comercio exterior visible o invisible, hacer conversiones y pactar arbitrajes; **veinte**. Celebrar, ejecutar, modificar, dejar sin efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner término a toda clase de contratos nominados e innominados y de actos jurídicos; **veintiuno**. Comprar, vender, prometer comprar o vender, ceder, permutar, enajenar, entregar, aportar, dar en arrendamiento o recibir, en usufructo, comodato, fideicomiso, uso o habitación, o por cualquier otro título traslativo o no de dominio, toda clase de bienes corporales e incorporeales, establecimientos de comercio o de cualquier otra especie, entre ellos valores mobiliarios y acciones, pactando precios, condiciones, plazos y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades. Estos actos pueden tener por objeto el dominio, el usufructo, derechos personales sobre los mismos o sobre una cuota de ellos. Comprar, vender, prometer comprar o vender, permutar, enajenar, aportar y dar en arrendamiento o recibir, en usufructo, comodato, fideicomiso, uso o habitación, toda clase de inmuebles; **veintidós**. Celebrar y ejecutar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y el contrato de opción y leasing respecto de toda clase de bienes. Celebrar contratos de transacción; **veintitrés**. Dar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con o sin opción de compra; **veinticuatro**. Depositar y retirar mercaderías o bienes en almacenes generales de depósito y en almacenes de Aduanas, dejar mercaderías en consignación y otorgar mandatos al efecto, endosar vales de depósito y de prenda; **veinticinco**. Dar y recibir especies en comodato, mutuo y anticresis, con o



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.notariosyconservadores.cl o www.cbrchile.cl con el siguiente código: **2020209383**



sin intereses y multas; **veintiséis**. Contratar y modificar seguros que caucionen contra toda clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; **veintisiete**. Realizar toda clase de operaciones de bolsa y corretaje; **veintiocho**. Celebrar toda clase de contratos de cuentas en participación; **veintinueve**. Comprar y vender bonos, acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantía, con o sin pacto de retroventa o recompra; **treinta**. Suscribir bonos, letras de créditos y acciones; **treinta y uno**. Celebrar, modificar y poner término a toda clase contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, y de prestación de servicios, sean ellos profesionales o no, fijando atribuciones, horarios y destinos, remuneraciones, honorarios y beneficios y, en general, atendiendo y efectuando todos los actos que directa o indirectamente se relacionen con la aplicación de las leyes sociales, del trabajo o previsionales; **treinta y dos**. Celebrar y modificar contratos colectivos; **treinta y tres**. Firmar actas de avenimiento y otorgar finiquitos; **treinta y cuatro**. Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaciones de pago, novación, compensación o cualquier otra forma de extinguir las obligaciones; **treinta y cinco**. Pedir y otorgar rendiciones de cuentas; **treinta y seis**. Convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas; **treinta y siete**. Celebrar toda clase de contratos de transporte y fletamento, sea como fletante, fletador o beneficiario; **treinta y ocho**. Ingresar a sociedades ya constituidas, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas, por acciones y de responsabilidad limitada, modificarlas, disolverlas, liquidarlas, fusionarlas, dividir las y transformarlas de un tipo a otro; **treinta y nueve**. Formar parte de comunidades, pactar indivisión y designar administradores proindiviso; **cuarenta**. Representar a la sociedad con voz y voto en cualquiera clase de empresas, comunidades, asociaciones o sociedades en que tenga interés, representación o parte; **cuarenta y uno**. Ceder a cualquier título toda clase de créditos, sean



nominativos, a la orden o al portador, y aceptar cesiones; **cuarenta y dos**. Dar y tomar bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general, caucionando obligaciones propias o de terceros; **cuarenta y tres**. Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporeales, sea en prenda civil o comercial de cualquier tipo o mediante prendas especiales y cancelarlas, caucionando obligaciones propias o de terceros; **cuarenta y cuatro**. Constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria, otorgar y aceptar fianzas simples solidarias, avalar letras de cambio, pagarés y toda clase de instrumentos negociables, sea para caucionar obligaciones propias o ajenas; **cuarenta y cinco**. Aceptar, posponer y cancelar toda clase de garantías; **cuarenta y seis**. Conceder quitas o esperas; **cuarenta y siete**. Nombrar agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios; **cuarenta y ocho**. Celebrar contratos de corretaje o mediación, distribución, licencia, factoring, know-how, franchising y comisiones para comprar y vender; **cuarenta y nueve**. Constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos; **cincuenta**. Pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes; **cincuenta y uno**. Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogación, por cesión de bienes, todo lo que el mandante adeudare, y, en general, extinguir obligaciones, novar y asumir deudas de terceros; **cincuenta y dos**. Constituir y pactar domicilios especiales; **cincuenta y tres**. Constituir, inscribir, aceptar, adquirir, transferir y ejecutar toda clase de actos con respecto a patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, procedimientos industriales y cualesquiera otras formas de propiedad industrial, intelectual y comercial, pudiendo oponerse a inscripciones de terceros; **cincuenta y cuatro**. Transferir, adquirir y celebrar contratos de royalties o licencia sobre toda clase de propiedad intelectual o industrial y procedimientos industriales; **cincuenta y cinco**. Solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto, terrestres o



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.notariosyconservadores.cl o www.cbrchile.cl con el siguiente código: **2020209383**



marítimas; **cincuenta y seis**. Representar a la sociedad con plenas facultades para ejecutar y celebrar cualquier especie de actos y contratos ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, entre ellas las autoridades de gobierno, en especial las autoridades educacionales, las intendencias, gobernaciones, ministerios, especialmente el Ministerio de Educación, los organismos internacionales y servicios públicos en general, las universidades estatales y privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica, colegios, liceos y demás instituciones educacionales y académicas, el Instituto de Normalización Previsional, las Cajas de Previsión, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, la Tesorería General de la República, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Instituciones de Salud Previsional, bancos y, en especial, el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Construcción, la Empresa Nacional de Minería, Ministerios y las Ilustres Municipalidades; **cincuenta y siete**. Enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia, certificada o no, giros y encomiendas; **cincuenta y ocho**. Celebrar toda clase de contratos de construcción por suma alzada o administración y subcontratar; **cincuenta y nueve**. Presentarse a toda clase de propuestas y firmar los documentos que se requieran al efecto; **sesenta**. Representar en juicio a la sociedad ante toda clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas; y **sesenta y uno**. Otorgar mandatos, generales o especiales, pudiendo otorgar a su vez a los mandatarios la facultad de conferir mandatos y revocarlos, modificarlos y delegar en todo o en parte sus atribuciones de administración o los poderes de representaciones que la sociedad tenga de terceros, en cualquier persona natural o jurídica. Acto seguido el Directorio acordó por unanimidad otorgar los siguientes poderes generales de administración: primero: actuando conjuntamente dos cualquiera de los



apoderados Clase B, podrán representar a la Sociedad con las facultades indicadas en los números Uno al Sesenta y uno, ambas inclusive, del presente numeral, con la sola limitación de que en cada acto o contrato el monto involucrado no podrá exceder de la suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; segundo: actuando conjuntamente cualquiera de los apoderados Clase B con uno cualquiera de los apoderados Clase A, podrán representar a la Sociedad con las facultades indicadas en los números Uno al Sesenta y uno, ambas inclusive, del presente numeral, con la sola limitación de que en cada acto o contrato el monto involucrado no podrá exceder de la suma de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y tercero: actuando conjuntamente dos cualquiera de los apoderados Clase A, podrán representar a la Sociedad con las facultades indicadas en los números Uno al Sesenta y uno, ambas inclusive, del presente numeral, sin restricción alguna. A continuación, el Presidente explicó al directorio que se hacía necesario otorgar poder especial a doña **Gabriela Carreño Olguín**, para que actuando conjuntamente con un apoderado Clase A, pueda aprobar o autorizar toda clase de nóminas de remuneraciones y de proveedores, pagar remuneraciones y de proveedores, pagar remuneraciones y demás beneficios laborales y sociales que digan relación con el área de recursos humanos de la Sociedad. Luego de un breve debate el directorio acordó, por unanimidad, aprobar que doña Gabriela Carreño, pueda conjuntamente con un apoderado Clase A, pagar honorarios a proveedores, y remuneraciones y beneficios a los trabajadores de la sociedad Instituto Profesional AIEP SpA. Las atribuciones antes señaladas facultan a la mandataria antes individualizada, actuando en la forma indicada, a girar en las cuentas corrientes que la sociedad mantiene en cualquiera de los bancos con que opere la misma, sin limitación alguna, con el objeto de realizar el pago de nóminas de remuneraciones de los trabajadores de las Sociedad. III.



CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Finalmente, se acuerda llevar a efecto todos los acuerdos adoptados en la presente sesión por el hecho de firmar el acta los directores asistentes a la sesión. **IV. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:** Se acuerda facultar a los abogados Manuel Sánchez del Villar, Joaquín Recart Apfelbeck y Diego Miranda Salinas, Rodrigo Núñez Arenas y Ana María Labbe Schrebler, para que, indistintamente uno cualquiera de ellos, puedan reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente Sesión de Directorio, y efectúen todos los trámites, actuaciones y gestiones que fueren necesarios o convenientes para legalizar los acuerdos adoptados; y para que otorguen las minutas o escrituras aclaratorias, rectificatorias o complementarias que sean necesarias para dichos efectos. Se faculta, además, al portador de copia autorizada de dicha escritura, para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes y, en especial, en el Registro de Comercio. **V. CLAUSURA:** No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las veintiuna horas. **CERTIFICADO** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete inciso cinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, se certifica por el Presidente y el Secretario, que los señores Raúl Peralta San Martín, Gonzalo Guzmán Ilic, Juan Antonio Guzmán Molinari, José Pedro Undurraga Izquierdo y Jorge Selume Zaror, participaron por medio de video conferencia en forma simultánea y permanente, en la Sesión de Directorio de once de septiembre de dos mil veinte de que da cuenta la presente acta. Hay firmas de Jorge Selume Zaror, Presidente; Juan Antonio Guzmán Molinari, Secretario: Sobre los pie de firmas de Jorge Selume Zaror, Presidente; José Pedro Undurraga Izquierdo, Director; Raúl Peralta San Martín, Director; Gonzalo Guzmán Ilic; Director; Juan Antonio Guzmán Molinari, Secretario; hay cinco firmas". Conforme con su original. Solicitado por el abogado don Sebastián Sánchez.

Notaría Cifuentes

Roberto Antonio Cifuentes Allel



En comprobante y previa lectura, firma el compareciente el presente instrumento. Se otorga copia. Esta hoja corresponde a la escritura de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA



Joaquín Recart



JOAQUÍN ALFREDO RECARTE APFELBECK
C.I.N°

[Signature]



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.- Verifique en www.notariosyconservadores.cl o www.cbrchile.cl con el siguiente código: 2020209383

TOTAL: 45000
O.T. N° 20P383
FECHA: 22-12-20



1+6 2020209383
REPERTORIO N° 11412



**RESUELVE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO ROL D-121-2020, SEGUIDO EN
CONTRA DE INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SpA,
TITULAR DE “INSTITUTO PROFESIONAL AIEP – SEDE
BARRIO UNIVERSITARIO, EDIFICIO ABDÓN
CIFUENTES”**

RESOLUCIÓN EXENTA N°1229

Santiago, 8 de junio de 2021.

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LOSMA”); en la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (en adelante “Ley N° 19.880”); en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 2.516, de 21 de diciembre de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto N° 31, de 08 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a Cristóbal de la Maza Guzmán en el cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Res. Ex. RA 119123-129-2019, que nombra Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA N° 119123/45/2021 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece el cargo de jefa del Departamento Jurídico de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 11 de noviembre de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes que Indica (en adelante, “D.S. N° 38/2011”); en la Resolución Exenta N° 491, de 31 de mayo de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucción de carácter general sobre criterios para homologación de zonas del D.S. N° 38/2011; en la Resolución Exenta N° 867, de 16 de septiembre de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba protocolo técnico para la Fiscalización del D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 693, de 21 de agosto de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Aprueba Contenido y Formatos de las Fichas para Informe Técnico del Procedimiento General de Determinación del Nivel de Presión Sonora Corregido; en la Resolución Exenta N° 85, de 22 de enero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba el documento “Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales, actualización”; en el expediente del procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-121-2020; y, en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

I. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO INFRACTOR Y DE

LA UNIDAD FISCALIZABLE

1. El presente procedimiento administrativo sancionatorio, Rol D-103-2019, fue iniciado en contra de Instituto Profesional AIEP SpA. (en adelante, “la titular” o “la empresa”), RUT N°96.621.640-9, titular de Instituto Profesional AIEP – Sede Barrio Universitario, Edificio Abdón Cifuentes (en adelante, “el establecimiento” o “la unidad fiscalizable”), ubicado en calle Abdón Cifuentes N°115, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

2. Dicho establecimiento tiene como objeto la prestación de servicios educacionales y por tanto, corresponde a una “Fuente Emisora de Ruidos”, al tratarse de una actividad de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°, números 4 y 13 del D.S. N° 38/2011 del MMA.

II. ANTECEDENTES GENERALES DE LA

INSTRUCCIÓN

3. Que, con fecha 27 de septiembre de 2017, esta Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”) recibió una denuncia presentada por Javier Antonio Meneses Pontigo, mediante la cual indicó que estaría sufriendo ruidos molestos producto de las actividades desarrolladas por “Instituto Profesional AIEP”, específicamente respecto de equipos de climatización.

4. Que, mediante Ord. N°2288, de 27 de septiembre de 2017, esta SMA informó al denunciante, que se tomó conocimiento de su denuncia y que ésta fue registrada en nuestros sistemas con el ID 285-RM-2017.

5. Que, mediante Ord. N°2377, de 11 de octubre de 2017, esta SMA encomendó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago (en adelante “Seremi de Salud de la RM”) actividades de fiscalización ambiental relacionadas con ruidos molestos, a la unidad fiscalizable objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio.

6. Que, mediante Ord. N°6849, de 12 de diciembre de 2017, la Seremi de Salud de la RM informó los resultados de la actividad de fiscalización de la norma de Emisión de Ruidos producidos por las actividades de la unidad fiscalizable del presente procedimiento administrativo sancionatorio, indicando resultados de excedencia por sobre el nivel normativo.

7. Que, con fecha 17 de agosto de 2018, la División de Fiscalización (“DFZ”) derivó al Departamento de Sanción y Cumplimiento (“DSC”), ambos de esta SMA, el **Informe de Fiscalización DFZ-2017-6400-XIII-NE-IA**, el cual contiene el Acta de Inspección Ambiental de 03 de noviembre de 2017 y sus respectivos anexos. Así, según consta en el Informe, un fiscalizador de Seremi de Salud se constituyó en el domicilio del denunciante individualizado en el considerando anterior, ubicado en calle Echaurren N°129, departamento 131,

comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, a fin de efectuar la respectiva actividad de fiscalización ambiental, que consta en el señalado expediente de fiscalización.

8. Que, según indica la Ficha de Evaluación de Niveles de Ruido, se consignó un incumplimiento a la norma de referencia contenida en el D.S. N° 38/2011 MMA. En efecto, la medición realizada desde el receptor N°1, con fecha 03 de noviembre de 2017, en condición externa, durante horario nocturno (21:00 a 07:00 horas), registró una excedencia de 3 dB(A). El resultado de dicha medición de ruido se resume en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Evaluación de medición de ruido en Receptor N° 1

Receptor	Horario de medición	NPC [dB(A)]	Ruido de Fondo [dB(A)]	Zona DS N°38/11	Límite [dB(A)]	Excedencia [dB(A)]	Estado
Receptor N° 1	Nocturno	53	No afecta	III	50	03	Supera

Fuente: Ficha de información de medición de ruido, Informe DFZ-2017-6400-XIII-NE-IA.

9. Que, con fecha 12 de agosto de 2020, DSC emitió el Memorándum DSC N° 17/2020 dirigido a DFZ, ambas de esta Superintendencia, con el objeto de aclarar la metodología aplicada en el IFA, respecto de la zonificación y coordenadas de ubicación del receptor sensible.

10. Que, con fecha 27 de agosto de 2020, la División de Fiscalización, emitió el Memorándum N° 41239/2020, dirigido a DSC, aclarando que el receptor se ubica en las coordenadas WGS 84, 19 s, Norte: 6.297.578 mS y Este: 345.101 mE.

11. Que, mediante el Memorándum D.S.C. N°552/2020, de 27 de agosto de 2020, se procedió a designar a Jaime Jeldres García como fiscal instructor titular, y a Monserrat Estruch Ferma como fiscal instructora suplente.

12. Que, con fecha 09 de septiembre de 2020, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de la LOSMA, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-121-2020, mediante la Formulación de Cargos en contra Instituto Profesional AIEP SpA., titular de “Instituto Profesional AIEP – Sede Barrio Universitario, Edificio Abdón Cifuentes”, ubicado en Abdón Cifuentes N°115, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

13. Que, el Resuelvo IV de dicha resolución, señaló que el presunto infractor tendría un plazo de 10 y 15 días hábiles administrativos para presentar un programa de cumplimiento (en adelante “PdC”) y descargos, respectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y 49 de la LOSMA.

14. Que, el Resuelvo VIII de la Res. Ex. N°1/ Rol D-121-2020, requirió al titular de información, en los siguientes términos:

- a) *Identidad y personería con que actúa del representante legal del titular, acompañando copia de escritura pública, o instrumento privado autorizado ante notario, que lo acredite.*
- b) *Los Estados Financieros de la empresa o el Balance Tributario del último año. De no contar con cualquiera de ellos, se requiere ingresar cualquier documentación que acredite los ingresos percibidos durante el último año calendario.*
- c) *Identificar las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido dentro de la unidad fiscalizable.*

- d) *Plano simple que ilustre la ubicación de las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido. Asimismo, indicar la orientación y referencia con los puntos de medición de ruidos individualizados en las Fichas de Medición de Ruidos incorporadas en el informe DFZ-2017-6400-XIII-NE-IA, además de indicar las dimensiones del lugar.*
- e) *Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de la Unidad Fiscalizable (establecimiento), indicando expresamente el horario de inicio y término de su funcionamiento, así como los días de la semana en los que funciona.*
- f) *Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido, indicando expresamente el horario de inicio y término de su funcionamiento, así como los días de la semana en los que funciona.*
- g) *Aire Acondicionado o salidas de ductos de aire: Indicar el número de salidas de ductos de aire y las dimensiones espaciales de cada uno de estos. Deberá incorporar fotografías de los ductos de salida de aire.*

15. Que, el Resuelvo IX de la misma resolución, amplió de oficio el plazo para presentar PdC y descargos en 5 y 7 días hábiles administrativos respectivamente.

16. Que, la antedicha resolución fue notificada al titular mediante carta certificada, recepcionada en la Oficina de Correos correspondiente con fecha 23 de septiembre de 2020, según da cuenta el código de seguimiento N°1181279116933, habiéndose entregado en el mismo acto, copia de la Guía para la presentación de un Programa de Cumplimiento por infracciones a la Norma de Emisión de Ruidos.

17. Que, encontrándose dentro de plazo, con fecha 09 de octubre de 2020, Eduardo Estrada Bayo y Patricia Cabello Pedrasa, ambos en representación del titular, presentaron un escrito de descargos, solicitando que *“los cargos formulados sean desechados como también eximir de la obligación de presentar un programa de cumplimiento”*. Junto con ello, acompañó documentos a su presentación. Asimismo, el titular solicitó eximirse de presentar aquellos requeridos en el Resuelvo VIII de la Resolución de Formulación de cargos,. Finalmente, el titular informó los correos electrónicos rodrigo.nunez@aiep.cl y valeria.olivares@aiep.cl para realizar las notificaciones en el presente procedimiento administrativo sancionatorio.

III. DICTAMEN

18. Que, el 26 de mayo de 2021, mediante MEMORANDUM D.S.C. – Dictamen N.º 47/2021, el Fiscal Instructor remitió a este Superintendente el dictamen del presente procedimiento administrativo sancionatorio, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la LOSMA.

IV. CARGO FORMULADO

19. En la formulación de cargos, se individualizó el siguiente hecho que se estima constitutivo de infracción a la norma que se indica:

Tabla N° 2: Formulación de cargos.

N°	Hecho que se estima constitutivo de infracción	Norma que se considera infringida	Clasificación				
1	La obtención, con fecha 03 de noviembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 53 dB(A) , medición efectuada en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona III.	D.S. 38/2011, Título IV, artículo 7: <i>“Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1”:</i> <i>Extracto Tabla N° 1. Art. 7° D.S. N° 38/2011</i> <table><tr><td>Zona</td><td>De 21 a 7 horas [dB(A)]</td></tr><tr><td>III</td><td>50</td></tr></table>	Zona	De 21 a 7 horas [dB(A)]	III	50	Leve conforme al numeral 3 del artículo 36 LOSMA.
Zona	De 21 a 7 horas [dB(A)]						
III	50						

V. NO PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL TITULAR

20. Habiendo sido notificada la Formulación de Cargos al titular (Res. Ex. N°1/ Rol D-121-2020), el titular, pudiendo hacerlo, no presentó un PdC, dentro del plazo otorgado para el efecto.

VI. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS POR PARTE DEL TITULAR

21. Que, tal como se señaló en el considerando 17 precedente el titular presentó descargos dentro del plazo otorgado para el efecto.

a) **Del escrito de descargos de fecha 09 de octubre de 2020**

22. Que, en su escrito de descargos, el titular solicitó que “los cargos formulados sean desechados como también eximir de la obligación de presentar un programa de cumplimiento”, indicando lo siguiente:

- a) Con fecha 30 de diciembre de 2019, el Instituto Profesional AIEP Spa habría cedido y transferido a la Universidad Nacional Andrés Bello la totalidad de los derechos, acciones, deberes y obligaciones que le correspondían como subarrendatario respecto del inmueble ubicado en calle Abdón Cifuentes N°115, comuna de Santiago, Región Metropolitana.
- b) Hacer presente que, respecto de la medición que indicó superación del límite máximo permitido en horario nocturno entre las 21:00 a 07:00 horas, la Institución solo se habría encontrado en actividades educacionales y administrativas hasta las 22:30 horas, y que luego de ese horario las Sedes se mantendrían cerradas.

descargos los siguientes documentos:

23. Que, el titular acompañó a su presentación de
- a) Contrato privado simple de Cesión de Contrato de Subarrendamiento, Instituto Profesional AIEP SpA. a Universidad Nacional Andrés Bello, de fecha 30 de diciembre de 2019.
 - b) Acta de Entrega de Inmueble, de fecha 06 de enero de 2020 (dos copias).
 - c) Reducción a Escritura Pública de Acta, Sesión de Directorio, "Instituto AIEP SpA", de fecha 03 de agosto de 2020, otorgada ante Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, en la que consta la personería de los representantes del titular.
 - d) Estados Financieros del titular al 31 de diciembre de 2019.
 - e) Res. Ex. N°1/ Rol D-121-2020, de fecha 09 de septiembre de 2020, que formuló cargos al titular e inició el presente procedimiento administrativo sancionatorio.

Superintendencia:

b) Del análisis de los descargos por parte de esta

b.1) Sobre lo alegado por el titular en cuanto a haber cedido el contrato de subarriendo a la Universidad Nacional Andrés Bello

24. Para acreditar lo alegado el titular, en cuanto a que con fecha 30 de diciembre de 2019, habría sido objeto de un contrato, mediante el cual el titular habría cedido y transferido a la Universidad Andrés Bello la totalidad de los derechos, acciones, deberes y obligaciones que le corresponderían como subarrendatario respecto del inmueble que comprende la unidad fiscalizable, se acompañó una copia de la Cesión de Contrato de Subarrendamiento del Instituto Profesional AIEP SpA a la Universidad Nacional Andrés Bello, de 30 de diciembre de 2019 y el Acta de Entrega del Inmueble, de 06 de enero de 2020.

25. Que, lo alegado y acreditado por el titular no es suficiente para desvirtuar el hecho infraccional que se le imputa, debido a que fue constatado con fecha 03 de noviembre de 2017, tal como se registró en la respectiva acta de fiscalización e informe técnico, fecha en la cual el Instituto Profesional AIEP SpA se encontraba en posesión del inmueble en el cual se emplaza la unidad fiscalizable, y por lo tanto, se encontraba en control de éste, razón por la cual ésta alegación será desestimada en la presente resolución.

b.2) Sobre lo alegado por el titular respecto del uso de la unidad fiscalizable hasta las 22:30 horas

26. Que, al respecto, el titular indicó que las actividades educacionales y administrativas finalizarían a las 22:30 horas, luego de lo cual la unidad fiscalizable se encontraría cerrada.

27. Que, al respecto cabe mencionar que el Acta de Inspección Ambiental y sus anexos señalan que la actividad de medición se realizó en la madrugada, a las 02:00 horas aproximadamente.

28. Lo anterior fue constatado por un funcionario de la Seremi de Salud, quien, para estos efectos, actúa como ministro de fe respecto de los hechos constatados, conforme se desarrolla latamente en el capítulo VII de la presente resolución.

29. Que, el titular no acompañó ningún medio que acredite su alegación y que permita destruir la presunción de veracidad de lo observado por el fiscalizador, razón por la cual esta alegación será desestimada.

VII. INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y VALOR PROBATORIO

30. El artículo 53 de la LOSMA, establece como requisito mínimo del dictamen, señalar la forma mediante la cual se han llegado a comprobar los hechos que fundan la formulación de cargos.

31. En el presente caso, no se han efectuado otros requerimientos de diligencias de prueba por parte de los interesados o del presunto infractor.

32. En relación a la prueba rendida en el presente procedimiento sancionatorio, es menester señalar, de manera general, que el inciso primero del artículo 51 de la LOSMA dispone que los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica¹, es decir, conforme a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

33. Por su parte, el artículo 156 del Código Sanitario, señala que el funcionario que practique la diligencia y levante el acta de la misma, tendrá el carácter de ministro de fe. En virtud de lo anterior, los hechos constatados por dicho ministro de fe gozan de una presunción de veracidad que sólo puede ser desvirtuada por prueba en contrario.

34. Además, cabe mencionar lo señalado por la Jurisprudencia Administrativa, en relación al valor de los actos constatados por ministros de fe. Al respecto, la Contraloría General de la República en su dictamen N° 37.549, de 25 de junio de 2012, precisó que “(...) *siendo dicha certificación suficiente para dar por acreditada legalmente la*

¹ De este modo, la sana crítica es un régimen intermedio de valoración de la prueba, estando en un extremo la prueba legal o tasada y, en el otro, la libre o íntima convicción. Asimismo, es preciso señalar que la apreciación o valoración de la prueba es el proceso intelectual por medio del cual, el juez o funcionario público, da valor, asigna mérito, a la fuerza persuasiva que se desprende del trabajo de acreditación y verificación acaecido por y ante él. Al respecto, véase Tavorari Raúl, El Proceso en Acción, Editorial Libromar Ltda., Santiago, 2000, pág. 282.

respectiva notificación, en consideración a que tal testimonio, por emanar de un ministro de fe, está dotado de una presunción de veracidad”.

35. A su vez, la doctrina nacional ha reconocido el valor probatorio a las actas de inspección. En este sentido, Jaime Jara y Cristián Maturana han manifestado que *“La característica relevante, pero problemática, que concierne a las actas de inspección radica en la presunción de certeza o veracidad que el Derecho reconocería. En virtud de esta presunción se ha estimado tradicionalmente que los hechos reflejados en el acta son ciertos, salvo prueba en contrario. Es decir, deben tenerse por verdaderos, a menos que quedare debidamente constatada su falta de sinceridad.”*²

36. Por lo tanto, y cumpliendo con el mandato legal, se utilizaron las reglas de la sana crítica para valorar la prueba rendida, valoración que se llevará a cabo en los capítulos siguientes, referidos a la configuración y calificación de la infracción, como de la ponderación de las sanciones.

37. En razón de lo anterior, corresponde señalar que los hechos sobre los cuales versa la formulación de cargos, han sido constatados por funcionarios de la Seremi de Salud RM, tal como consta en el Acta de Inspección Ambiental de fecha 3 de noviembre de 2017, así como en la Ficha de Información de Medición de Ruido y en los Certificados de Calibración, todos ellos incluidos en el Informe de Fiscalización remitido a esta División.

38. En el presente caso, tal como consta en los Capítulos V y VI, el titular presentó descargos con alegaciones referidas a la certeza de los hechos verificados en la inspección ambiental efectuada el día 3 de noviembre de 2017, sin embargo, no presentó prueba en contrario respecto a los hechos constatados en la misma.

39. En consecuencia, la medición efectuada por el fiscalizador de la Seremi de Salud RM, el día 3 de noviembre de 2017, que arrojó un nivel de presión sonora corregido de 53 dB(A), en horario nocturno, en condición externa, tomadas desde un receptores sensible con domicilio ubicado en calle Echaurren N°129, departamento 131, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, homologables a la Zona III de la Norma de Emisión de Ruidos, gozan de una presunción de veracidad por haber sido efectuadas por un ministro de fe, y no haber sido desvirtuadas ni controvertidas en el presente procedimiento.

VIII. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

40. Considerando lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, corresponde señalar que se tiene por probado el hecho que funda la formulación de cargos contenida en la Resolución Exenta N°1/ Rol D-121-2020, esto es, *“La obtención, con fecha 03 de noviembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 53 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona III.”*

² JARA Schnettler, Jaime y MATURANA Miquel, Cristián. “Actas de fiscalización y debido procedimiento administrativo”. Revista de Derecho Administrativo N° 3, Santiago, 2009. P. 11.

41. Para ello fue considerado el Informe de Medición señalado precedentemente, cuyos resultados fueron examinados y validados por esta Superintendencia, de acuerdo a la metodología dispuesta en el D.S. N° 38/2011 del MMA.

42. Finalmente, el referido hecho se identifica con el tipo establecido en la letra h) del artículo 35 de la LOSMA, esto es, el incumplimiento de una norma de emisión, en este caso el D.S. N° 38/2011 del MMA, por lo que se tiene a su vez por configurada la infracción.

IX. SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

43. Conforme a lo señalado en el Capítulo anterior, el hecho constitutivo de la infracción que fundó la formulación de cargos en la Resolución Exenta N°1/ Rol D-121-2020, fue identificado en el tipo establecido en la letra h) del artículo 35 de la LOSMA, esto es, el incumplimiento de una norma de emisión, en este caso el D.S. N° 38/2011 del MMA.

44. En este sentido, en relación al cargo formulado, se propuso en la formulación de cargos clasificar dicha infracción como leve³, considerando que, de manera preliminar, se estimó que no era posible encuadrarlo en ninguno de los casos establecidos por los numerales 1° y 2° del citado artículo 36.

45. Al respecto, es de opinión de este Superintendente mantener dicha clasificación, debido a que, de los antecedentes aportados al presente procedimiento, no es posible colegir de manera fehaciente que se configure alguna de las causales que permitan clasificar la infracción como gravísima o grave, conforme a lo señalado en el acápite de valor de seriedad de esta resolución.

46. Por último, es pertinente hacer presente que de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 39 de la LOSMA, las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta mil unidades tributarias anuales.

X. PONDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LOSMA APLICABLES QUE CONCURREN A LA INFRACCIÓN

a) Rango de sanciones aplicables según gravedad asignada a la infracción.

47. El artículo 38 de la LOSMA establece el catálogo o tipos de sanciones que puede aplicar la SMA, estos son, amonestaciones por escrito, multas de una a diez mil unidades tributarias anuales (UTA), clausura temporal o definitiva y revocación de la RCA.

³ El artículo 36 N° 3, de la LOSMA, dispone que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatoria y que no constituyan infracción gravísima o grave

48. Por su parte, el artículo 39, establece que la sanción se determinará según su gravedad, en rangos, indicando el el literal b) que *“(…) [l]as infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales (…)”*.

49. La determinación específica de la sanción que debe ser aplicada dentro de dicho catálogo, está sujeta a la configuración de las circunstancias indicadas en el artículo 40 de la LOSMA.

50. En ese sentido, la Superintendencia del Medio Ambiente ha desarrollado un conjunto de criterios que deben ser considerados al momento de ponderar la configuración de estas circunstancias a un caso específico, los cuales han sido expuestos en el documento “Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales – Actualización 2017” de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “Bases Metodológicas”), aprobada mediante Resolución Exenta N.º 85, de 22 enero 2018, de la SMA y vigente en relación a la instrucción del presente procedimiento. A continuación, se hará un análisis respecto a la concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 40 de la LOSMA en el presente caso. En dicho análisis deben entenderse incorporados los lineamientos contenidos en las Bases Metodológicas.

b) Aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, al caso particular.

51. El artículo 40 de la LOSMA, dispone que para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

- a) *La importancia del daño causado o del peligro ocasionado⁴.*
- b) *El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción⁵.*
- c) *El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción⁶.*
- d) *La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el*

⁴ En cuanto al daño causado, la circunstancia procede en todos los casos en que se estime exista un daño o consecuencia negativa derivada de la infracción, sin limitación a los casos en que se realice la calificación jurídica de daño ambiental. Por su parte, cuando se habla de peligro, se está hablando de un riesgo objetivamente creado por un hecho, acto u omisión imputable al infractor, susceptible de convertirse en un resultado dañoso.

⁵ Esta circunstancia incluye desde la afectación grave hasta el riesgo de menor importancia para la salud de la población. De esta manera, se aplica tanto para afectaciones inminentes, afectaciones actuales a la salud, enfermedades crónicas, y también la generación de condiciones de riesgo, sean o no de importancia.

⁶ Esta circunstancia se construye a partir de la consideración en la sanción de todas aquellas ganancias o beneficios económicos que el infractor ha podido obtener por motivo de su incumplimiento. Las ganancias obtenidas como producto del incumplimiento pueden provenir, ya sea por un aumento en los ingresos, o por una disminución en los costos, o una combinación de ambos.

hecho, acción u omisión constitutiva de la misma⁷.

- e) La conducta anterior del infractor⁸.*
- f) La capacidad económica del infractor⁹.*
- g) El cumplimiento del programa señalado en la letra r) del artículo 3^o¹⁰.*
- h) El detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado¹¹.*
- i) Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción¹².*

52. En este sentido, corresponde desde ya indicar que las siguientes circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, no son aplicables en el presente procedimiento:

- a. **Letra d), intencionalidad**, puesto que no constan antecedentes que permitan afirmar la existencia de una intención positiva o dolosa de infringir la norma contenida en el D.S. N° 38/2011 por parte de la empresa.
- b. **Letra d), grado de participación**, puesto que la atribución de responsabilidad de la infracción es a título de autor. En este sentido, se reitera lo señalado en el considerando 25 de la presente resolución. En efecto, AIEP SpA. participó en calidad de autor en la comisión del hecho infraccional, debido que era éste quien se encontraba en control directo de la unidad fiscalizable al momento de constatare la infracción.
- c. **Letra e), conducta anterior negativa**, puesto que el titular en relación a la Unidad Fiscalizable objeto de este procedimiento administrativo sancionador no presenta infracciones a exigencias ambientales cometidas con anterioridad al hecho infraccional objeto del presente procedimiento, que hayan sido sancionadas por la SMA, un organismo sectorial o un órgano jurisdiccional.
- d. **Letra h), detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado (ASPE)** puesto que el establecimiento no se encuentra en un ASPE.

⁷ En lo referente a la intencionalidad en la comisión de la infracción, es necesario manifestar que ésta implica el haber actuado con la intención positiva de infringir, lo que conlleva necesariamente la existencia de un elemento antijurídico en la conducta del presunto infractor que va más allá de la mera negligencia o culpa infraccional. También se considera que existe intencionalidad, cuando se estima que el presunto infractor presenta características que permiten imputarle conocimiento preciso de sus obligaciones, de la conducta que realiza en contravención a ellas, así como de la antijuricidad asociada a dicha contravención. Por último, sobre el grado de participación en el hecho, acción u omisión, se refiere a verificar si el sujeto infractor en el procedimiento sancionatorio, corresponde al único posible infractor y responsable del proyecto, o es un coautor de las infracciones imputadas.

⁸ La conducta anterior del infractor puede ser definida como el comportamiento, desempeño o disposición al cumplimiento que el posible infractor ha observado a lo largo de la historia, específicamente, de la unidad de proyecto, actividad, establecimiento, instalación o faena que ha sido objeto del procedimiento administrativo sancionatorio.

⁹ La capacidad económica atiende a las particulares facultades o solvencia del infractor al momento de incurrir en el pago de la sanción.

¹⁰ Esta circunstancia se determina en función de un análisis respecto del grado de ejecución de un programa de cumplimiento que haya sido aprobado en el mismo procedimiento sancionatorio

¹¹ Esta circunstancia se determina en función de un análisis respecto de la afectación que un determinado proyecto ha causado en un área protegida.

¹² En virtud de la presente disposición, en cada caso particular, la SMA podrá incluir otros criterios innominados que, fundadamente, se estimen relevantes para la determinación de la infracción.

- e. **Letra g), cumplimiento del programa de cumplimiento**, pues el infractor no presentó PdC en el procedimiento, conforme a lo señalado en el Capítulo V.

53. Respecto de las circunstancias que a juicio fundado de la Superintendencia son relevantes para la determinación de la sanción y que normalmente son ponderadas en virtud de la letra i) del artículo 40, en este caso **no** aplica la siguiente:

- a. **Letra i), respecto de medidas correctivas**, puesto que no se tienen antecedentes que permitan acreditar la implementación de acciones idóneas, efectivas y adoptadas de manera voluntaria por el infractor para la corrección de los hechos constitutivos de infracción y la eliminación o reducción de sus efectos, en este caso, la adopción de medidas de mitigación de ruidos.

54. Respecto a las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA que corresponde aplicar en el presente caso, a continuación, se expone la ponderación de dichas circunstancias:

A. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción (letra c).

55. Esta circunstancia se construye a partir de la consideración en la sanción de todo beneficio económico que el infractor haya podido obtener por motivo de su incumplimiento, el cual puede provenir de una disminución en los costos o de un aumento en los ingresos, en un determinado momento o período de tiempo, que no hubiese tenido lugar en ausencia de la infracción. En términos generales, el beneficio económico obtenido por motivo de la infracción equivale al valor económico que significa para el infractor la diferencia entre cumplir con la normativa y no cumplir con ella.

56. Es así como para su determinación es necesario configurar dos escenarios económicos contrapuestos: un escenario de cumplimiento normativo, es decir, el escenario hipotético en que efectivamente se dio cumplimiento satisfactorio a la normativa ambiental y el escenario de incumplimiento, es decir, el escenario real en el cual se comete la infracción. A partir de la contraposición de estos escenarios, se distinguen dos tipos de beneficio económico de acuerdo a su origen: el beneficio asociado a costos retrasados o evitados y el beneficio asociado a ganancias ilícitas anticipadas o adicionales.

57. Se describen a continuación los elementos que configuran ambos escenarios en este caso –los costos involucrados y las respectivas fechas en que fueron o debieron ser incurridos–, para luego entregar el resultado de la aplicación de la metodología de estimación de beneficio económico utilizada por esta Superintendencia, la cual se encuentra descrita en las Bases Metodológicas.

58. Cabe destacar que la configuración y el análisis de los escenarios que se describen a continuación, fueron efectuados considerando la situación existente durante la actividad de medición de ruido efectuada con fecha 3 de noviembre de 2017 ya señalada, en donde se registró su máxima excedencia de **3 dB(A)** por sobre la norma en horario nocturno en el receptor sensible N°1, ubicado en calle Echaurren N°129, departamento N°131,

comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago., siendo el ruido emitido por Instituto Profesional AIEP – Sede Barrio Universitario, Edificio Abdón Cifuentes.

(a) Escenario de Cumplimiento.

59. Este se determina a partir de los costos asociados a las acciones o medidas de mitigación de ruidos que, de haber sido implementadas de forma oportuna, hubiesen posibilitado el cumplimiento de los límites de presión sonora establecidos en el D.S. N.º 38/2011 del MMA, y por lo tanto, evitado el incumplimiento. Las medidas identificadas como las más idóneas para haber evitado la excedencia de la norma por parte del establecimiento objeto del presente procedimiento y sus respectivos costos son los siguientes:

Tabla N° 3: Costos de medidas que hubiesen evitado la infracción en un escenario de cumplimiento.¹³

Medida	Costo (sin IVA)		Referencia /Fundamento
	Unidad	Monto	
Instalación de silenciadores en los equipos de extracción/climatización ubicados en la cubierta del inmueble.	UF	175	PDC ROL D-051-2017
Costo total que debió ser incurrido	\$	4.665.922	

60. En relación a las medidas y costos señalados anteriormente, cabe indicar, que se determinó en primer término las medidas de naturaleza mitigatoria de ruido más recurrentes e idóneas para implementar en una fuente de ruidos identificada como sistema de climatización, a fin de impedir la emisión de ruidos molestos hacia los receptores sensibles. La determinación de dichas medidas debe considerar la naturaleza de la fuente, frecuencia de funcionamiento, similitudes tanto en los niveles de excedencia, rubro de la unidad fiscalizable y costos de mercado.

61. Por lo anterior, se utilizó la acción implementada en el procedimiento sancionatorio Rol D-051-2017, la cual da cuenta de la naturaleza mitigatoria e idoneidad de esta medida en su aplicación a equipos de extractores de aires, tales como los equipos de climatización del presente caso. Dicha medida fue implementada para un emplazamiento de aproximado¹⁴ de 85 m². El costo asociado a la implementación de este tipo de encierro acústico correspondía a 428 UF más IVA.

62. Debido a lo anterior, considerando un precio unitario aproximado de 5 UF por m² habilitado, y considerando una superficie de 35 m² para la insonorización de los equipos identificados¹⁵ se obtiene que el precio para habilitar una insonorización de esta envergadura para el citado equipo es de 175 UF.

63. Bajo un supuesto conservador, se considera que los costos de las medidas de mitigación debieron haber sido incurridos, al menos, de forma

¹³ En el caso de costos en UF, su expresión en pesos se efectúa en base al valor promedio de la UF del mes en que el costo debió ser incurrido.

¹⁴ Obtenido a través de la georreferenciación y posterior fotointerpretación del plano “Layout cubierta local Express José Domingo Cañas con señalización de silenciadores.” presentado en el informe DFZ-2018-1134-XIII-PC-MA.

¹⁵ Obtenido a través de fotointerpretación de las fuentes de emisión identificadas en el Reporte Técnico de la medición realizada el 3 de noviembre de 2017.

previa a la fecha de fiscalización ambiental en la cual se constató la excedencia de la norma, el día 3 de noviembre de 2017.

(b) Escenario de Incumplimiento.

64. Este se determina a partir de los costos que han sido incurridos por motivo de la infracción -en este caso, los costos asociados a medidas de mitigación de ruidos u otros costos incurridos por motivo de la excedencia de la norma-, y las respectivas fechas o periodos en que estos fueron incurridos.

65. De acuerdo a los antecedentes disponibles en el procedimiento, el titular no ha acreditado la implementación de medidas de naturaleza mitigatoria y por lo tanto, haber incurrido en algún costo asociado a ellas.

66. Respecto de los costos asociados a la implementación de medidas de mitigación que no han sido ejecutadas a la fecha de la presente resolución, bajo un supuesto conservador para efectos de la modelación, se considera que estos son incurridos en la fecha estimada de pago de multa, configurando un beneficio económico por el retraso de estos costos hasta dicha fecha.

(c) Determinación del beneficio económico

67. En la siguiente tabla se resume el origen del beneficio económico, que resulta de la comparación de los escenarios de cumplimiento e incumplimiento, así como también el resultado de la aplicación del método de estimación de beneficio económico utilizado por esta Superintendencia. Para efectos de la estimación, se consideró una fecha de pago de multa al 30 de junio de 2021, y una tasa de descuento de 10,1%, estimada en base a información de referencia del rubro de establecimientos educacionales. Los valores en UTA se encuentran expresados al valor de la UTA del mes de junio de 2021.

Tabla N° 4: Resumen de la ponderación de Beneficio Económico.

Costo que origina el beneficio	Costos retrasado o evitado		Beneficio económico (UTA)
	\$	UTA	
Costos retrasados por la implementación de medidas por motivo de la infracción, de forma posterior a la constatación de esta.	4.665.922	7,5	1,8

68. Por lo tanto, la presente circunstancia será considerada en la determinación de la sanción específica aplicable a la infracción.

B. Componente de Afectación

b.1. Valor de Seriedad

69. El valor de seriedad se determina a través de la ponderación conjunta del nivel de seriedad de los efectos de la infracción y de la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental. De esta manera, a continuación, se procederá a ponderar dentro de las circunstancias que constituyen este valor, aquellas que concurren en la especie, esto es, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse, y el análisis relativo a la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, quedando excluida del análisis la letra h) del artículo 40 de la LOSMA debido a que en el presente caso no resulta aplicable.

b.1.1. La importancia del daño causado o del peligro ocasionado (letra a)

70. La letra a) del artículo 40 de la LOSMA se vincula a los efectos ocasionados por la infracción cometida, estableciendo dos hipótesis de procedencia: la ocurrencia de un daño o de un peligro atribuible a una o más infracciones cometidas por el infractor.

71. Es importante destacar que el concepto de daño al que alude la letra a) del artículo 40 de la LOSMA, es más amplio que el concepto de daño ambiental del artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.300, referido también en los numerales 1 letra a) y 2 letra a) del artículo 36 de la LOSMA. De esta forma, su ponderación procederá siempre que se genere un menoscabo o afectación que sea atribuible a la infracción cometida, se trate o no de un daño ambiental. En consecuencia, se puede determinar la existencia de un daño frente a la constatación de afectación a la salud de las personas y/o menoscabo al medio ambiente, sean o no significativos los efectos ocasionados.

72. En el presente caso, no existen antecedentes que permitan confirmar la generación de un daño producto de la infracción, al no haberse constatado una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo al medio ambiente o uno o más de sus componentes, ni afectación a la salud de las personas que sea consecuencia directa de la infracción constatada. Por lo tanto, el daño no está acreditado en el presente procedimiento sancionatorio.

73. En cuanto al concepto de peligro, los tribunales ambientales han indicado que *“De acuerdo al texto de la letra a) del artículo 40, existen dos hipótesis diversas que permiten configurarla. La primera de ellas es de resultado, que exige la concurrencia de un daño; mientras que la segunda, es una hipótesis de peligro concreto, de ahí que el precepto hable de “peligro ocasionado”, es decir, requiere que se haya presentado un riesgo de lesión, más no la producción de la misma”*¹⁶. Vale decir, la distinción que realizan los tribunales entre el daño y el peligro indicados en la letra a) del artículo 40 de la LOSMA, se refiere a que en la primera hipótesis -daño- la afectación debe haberse producido, mientras que en la segunda hipótesis -peligro ocasionado- basta con que exista la posibilidad de una afectación, es decir, un riesgo. En razón de lo anterior, para determinar el peligro ocasionado, se debe determinar si existió o no un riesgo de afectación.

¹⁶ Iltre. Segundo Tribunal Ambiental, sentencia en causa Rol R-128-2016, de fecha 31 de marzo de 2017 [caso MOP – Embalse Ancoa]

74. Conforme a lo ya indicado, el Servicio de Evaluación Ambiental -en el marco de una evaluación del riesgo para la salud de la población- definió el concepto de riesgo como la “probabilidad de ocurrencia del efecto adverso sobre el receptor”¹⁷. En este sentido, el mismo organismo indica que, para evaluar la existencia de un riesgo, se deben analizar dos requisitos: a) si existe un peligro¹⁸ y b) si se configura una ruta de exposición que ponga en contacto dicho peligro con un receptor sensible¹⁹, sea esta completa o potencial²⁰. El SEA ha definido el peligro como “capacidad intrínseca de una sustancia, agente, objeto o situación de causar un efecto adverso sobre un receptor”²¹. Conforme a lo anterior, para determinar si existe un riesgo, a continuación, se evaluará si en el presente procedimiento los antecedentes permiten concluir que existió un peligro, y luego si existió una ruta de exposición a dicho peligro.

75. En relación al primer requisito relativo a la existencia de un peligro, entendido como capacidad intrínseca de una sustancia, agente, objeto o situación de causar un efecto adverso sobre un receptor, el conocimiento científicamente afianzado²² ha señalado que los efectos adversos del ruido sobre la salud de las personas, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., y el Programa Internacional de Seguridad Química (IPCA), son: efectos cardiovasculares, respuestas hormonales (hormonas de estrés) y sus posibles consecuencias sobre el metabolismo humano y sistema inmune, rendimiento en el trabajo y la escuela, molestia, interferencia en el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de desamparo), interferencia con la comunicación oral, efectos sobre fetos y recién nacidos y efectos sobre la salud mental²³.

76. Ahora bien, respecto al peligro específico del ruido nocturno, se puede señalar que existe evidencia suficiente de sus efectos inmediatos sobre el sueño y calidad de vida y bienestar. Respecto a la calidad del sueño, el ruido nocturno, genera efectos como: despertares nocturnos o demasiado temprano, prolongación del período del comienzo del sueño, dificultad para quedarse dormido, fragmentación del sueño, reducción del período del sueño, incremento de la movilidad media durante el sueño. Respecto a la calidad de vida y bienestar, existe evidencia para efectos como molestias durante el sueño y uso de somníferos y sedantes. También, el ruido nocturno puede afectar condiciones médicas, provocando insomnio (diagnosticado por un profesional médico). Además de efectos directos en el sueño, el ruido durante el sueño, provoca; incremento de la presión arterial, de la tasa cardíaca y de la amplitud del pulso;

¹⁷ Servicio de Evaluación Ambiental. 2012. “Guía de evaluación de impacto ambiental, riesgo para la salud de la población”. pág. 19. Disponible en línea:

http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/20121109_GUIA_RIESGO_A_LA_SALUD.pdf

¹⁸ En este punto, debe indicarse que el concepto de “peligro” desarrollado por el SEA se diferencia del concepto desarrollado por los tribunales ambientales de “peligro ocasionado” contenido en la letra a) del artículo 40 de la LOSMA.

¹⁹ Servicio de Evaluación Ambiental. 2012. “Guía de evaluación de impacto ambiental, riesgo para la salud de la población”. pág. 19. Disponible en línea:

http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/20121109_GUIA_RIESGO_A_LA_SALUD.pdf

²⁰ Véase Servicio de Evaluación Ambiental. 2012. “Guía de evaluación de impacto ambiental, riesgo para la salud de la población”. Al respecto, una ruta de exposición completa, es la que se configura cuando se presentan todos los elementos enlistados en la página 39 del documento, y una ruta de exposición potencial es aquella a la que le falta uno o más de los elementos indicados, pero respecto de la cual existe información disponible que indica que la exposición es probable.

²¹ Ídem.

²² World Health Organization Regional Office for Europe. Night Noise Guidelines for Europe (2009). WHO Regional Office for Europe Publications. Disponible online en: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe>.

²³ Guía OSMAN Andalucía. Ruido y Salud (2010), página 19.

vasoconstricción; cambios en la respiración; arritmias cardíacas; incremento del movimiento corporal; además de procesos de excitación de los sistemas nervioso central y vegetativo²⁴.

77. Asimismo, la exposición al ruido tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas por cuanto incide en la generación de efectos emocionales negativos, tales como irritabilidad, ansiedad, depresión, problemas de concentración, agitación y cansancio, siendo mayor el efecto cuanto más prolongada sea la exposición al ruido²⁵.

78. Conforme a lo indicado en los considerandos anteriores, el ruido es un agente con la capacidad intrínseca de causar un efecto adverso sobre un receptor, por lo que se configura el primer requisito del riesgo, o sea, el peligro del ruido.

79. Por otra parte, es posible afirmar que la infracción generó un riesgo a la salud de la población, puesto que, en el presente caso, se verificaron los elementos para configurar una ruta de exposición completa²⁶. Lo anterior, debido a que existe una fuente de ruido identificada, se identifica al menos un receptor cierto²⁷ y un punto de exposición (receptor identificado en la ficha de medición de ruidos como receptor N°1, de la actividad de fiscalización realizada en el domicilio del receptor) y un medio de desplazamiento, que en este caso es el aire, y las paredes que transfieren las vibraciones. En otras palabras, se puede afirmar que, al constatar la existencia de personas expuestas al peligro ocasionado por el nivel de presión sonora emitida por la fuente, cuyo valor registrado excedió los niveles permitidos por la norma, se configura una ruta de exposición completa y, por tanto, se configura, a su vez, un riesgo.

80. Una vez determinada la existencia de un riesgo, corresponde ponderar su importancia. La importancia alude al rango de magnitud, entidad o extensión de los efectos generados por la infracción, o infracciones, atribuidas al infractor. Esta ponderación permitirá que este elemento sea incorporado en la determinación de la respuesta sancionatoria que realiza la SMA.

81. Al respecto, es preciso considerar que los niveles permitidos de presión sonora establecidos por medio del DS N.°38 del MMA fueron definidos con el objetivo de proteger la salud de las personas, en base a estudios que se refieren a los límites tolerables respecto del riesgo a la salud que el ruido puede generar. Por tanto, es posible afirmar razonablemente que a mayor nivel de presión sonora por sobre el límite normativo, mayor es la probabilidad de ocurrencia de efectos negativos sobre el receptor, es decir, mayor es el riesgo ocasionado.

²⁴ Guía OSMAN Andalucía. Ruido y Salud (2010), páginas 22-27.

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ La ruta de exposición completa se configura cuando todos los siguientes elementos están presentes: Una fuente contaminante, por ejemplo, una chimenea o derrame de combustible; un mecanismo de salida o liberación del contaminante; medios para que se desplace el contaminante, como las aguas subterráneas, el suelo y el subsuelo, el agua superficial, la atmósfera, los sedimentos y la biota, y mecanismos de transporte; un punto de exposición o un lugar específico en el que la población puede entrar en contacto con el contaminante; una vía de exposición por medio de la que los contaminantes se introducen o entran en contacto con el cuerpo (para contaminantes químicos, las vías de exposición son inhalación [p. ej., gases y partículas en suspensión], ingesta [p. ej., suelo, polvo, agua, alimentos] y contacto dérmico [p. ej., suelo, baño en agua]); y una población receptora que esté expuesta o potencialmente expuesta a los contaminantes.

²⁷ SEA, 2012. Guía de Evaluación de impacto ambiental riesgo para la salud de la población en el SEIA. Concepto de riesgo en el artículo 11 de la Ley N°19.300, página N°20.

82. En este sentido, la emisión de un nivel de presión sonora de 53 dB(A), en horario nocturno, que conllevó una superación respecto del límite normativo de 3 dB(A), lo cual implica un aumento en un factor multiplicativo de 2 en la energía del sonido²⁸ aproximadamente, respecto a aquella permitida para el nivel de ruido tolerado por la norma. Lo anterior da cuenta de la magnitud de la contaminación acústica generada por la actividad del titular.

83. Como ya fue señalado, otro elemento que incide en la magnitud del riesgo es el tiempo de exposición al ruido por parte del receptor. Al respecto, según los casos que esta Superintendencia ha tramitado en sus años de funcionamiento, le permiten inferir que las maquinarias y herramientas emisoras de ruido tienen un funcionamiento periódico, puntual o continuo²⁹. De esta forma, en base a la información contenida en el acta de fiscalización y una estimación de funcionamiento basada en la homologación de equipos de similar función, se ha determinado para este caso una frecuencia de funcionamiento periódica en relación con la exposición al ruido en donde, acorde a la constatación de la superación, esta exposición sólo superaría el límite normativo durante el horario nocturno³⁰, en base a un criterio de horas proyectadas a un año de funcionamiento de la unidad fiscalizable.

84. En razón de lo expuesto, es de opinión de esta Superintendencia sostener que la superación de los niveles de presión sonora, sumado a la frecuencia de funcionamiento y por ende la exposición al ruido constatada durante el procedimiento sancionatorio, permite inferir que **efectivamente se ha acreditado un riesgo a la salud, aunque no de carácter significativo**, y, por lo tanto, será considerado en esos términos en la determinación de la sanción específica.

b.1.2 El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción (letra b)

85. Mientras en la letra a) se pondera la importancia del peligro concreto –riesgo– ocasionado por la infracción, esta circunstancia introduce un criterio numérico de ponderación, que recae exclusivamente sobre la cantidad de personas que podrían haber sido afectadas en base al riesgo que se haya determinado en función de la ponderación de la letra a). Que, si bien los antecedentes acompañados en el presente procedimiento han permitido constatar la existencia de peligro para la salud de las personas, esta circunstancia del artículo 40 de la LOSMA no requiere que se produzca un daño o afectación, sino solamente la posibilidad de afectación asociada a un riesgo a la salud sea este significativo o no.

²⁸Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Disponible online en https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/noise_basic.html

²⁹ Por **funcionamiento puntual** se entiende aquellas actividades que se efectúan una vez o más, pero que no se realizan con periodicidad; se estima que estas son menores a 168 horas de funcionamiento al año. Por **funcionamiento periódico**, se entenderá aquellas actividades que se realizan en intervalos regulares de tiempo o con cierta frecuencia, descartando una frecuencia de funcionamiento puntual o continua; las horas de funcionamiento anual varían entre 168 a 7280. Finalmente, por **funcionamiento continuo**, se refiere a aquellos equipos, maquinarias, entre otros, que funcionan todo el tiempo; su frecuencia de funcionamiento anual se encuentra dentro de un rango mayor a 7280 horas.

³⁰ En caso de:

- Constatación de zona rural en donde el límite está determinado por el artículo 9 letra a (Nivel de ruido de fondo +10dB(A).
- Constatación nocturna es menor o igual a límite normativo diurno.

86. El razonamiento expuesto en el párrafo precedente ha sido corroborado por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 04 de junio de 2015, dictada en autos caratulados “Sociedad Eléctrica Santiago S.A. contra Superintendencia del Medio Ambiente”, Rol N° 25931-2014, disponiendo: *“a juicio de estos sentenciadores, no requiere probar que se haya afectado la salud de las personas, sino que debe establecerse la posibilidad de la afectación, cuestión que la SMA realizó en monitoreos nocturnos en que quedó establecido la superación de los niveles establecidos en el Decreto Supremo N° 146 del año 1997”*.

87. Con el objeto de determinar el número de eventuales afectados por los ruidos emitidos desde la fuente emisora, se procedió a evaluar el número de habitantes que se ven potencialmente afectados debido a las emisiones de dicha fuente. Para lo anterior se procedió, en primera instancia, a establecer un Área de Influencia (en adelante, “AI”) de la fuente de ruido, considerando que ésta se encuentra en una Zona III.

88. Para determinar el AI, se consideró el hecho que la propagación de la energía sonora se manifiesta en forma esférica, así como su correspondiente atenuación con la distancia, la que indica que al doblarse la distancia se disminuye 6 dB(A) la presión sonora. Para lo anterior, se utilizó la expresión que determina que la amplitud del nivel de presión del sonido emitido desde una fuente puntual es, en cada punto, inversamente proporcional a la distancia de la fuente, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula³¹:

$$L_p = L_x - 20 \log_{10} \frac{r}{r_x} \text{ db}$$

Donde,

L_x : Nivel de presión sonora medido.

r_x : Distancia entre fuente emisora y receptor donde se constata excedencia.

L_p : Nivel de presión sonora en cumplimiento de la normativa.

r : Distancia entre fuente emisora y punto en que se daría cumplimiento a la normativa (radio del AI).

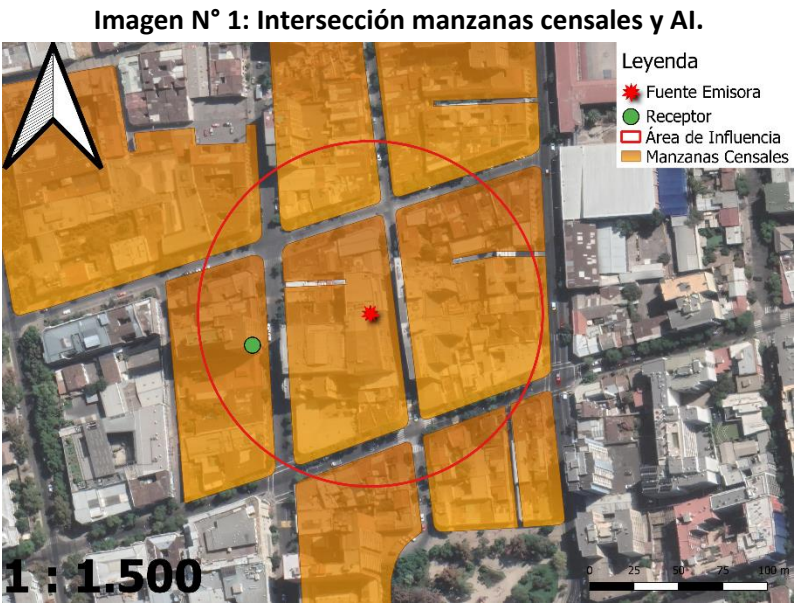
89. En relación con lo señalado en el párrafo anterior, cabe destacar que la fórmula presentada no incorpora la atenuación que provocarían factores tales como la disminución por divergencia - debido a la dispersión de la energía del sonido -, la reflexión y la difracción en obstáculos sólidos, y la reflexión y la formación de sombras por los gradientes de viento y temperatura; debido principalmente a que las condiciones del medio de propagación del sonido no son ni homogéneas ni estables. En función de esto, cabe manifestar que el conocimiento empírico adquirido por esta SMA en estos 7 años de funcionamiento, a través de los más de 360 casos analizados de infracciones al DS N.°38/2011 MMA, le han permitido actualizar su estimación del AI, incorporando factores de atenuación del radio del AI orientados a aumentar la representatividad del número de personas afectadas en función de las denuncias presentadas ante esta Superintendencia.

90. En base a lo anterior, considerando el máximo registro obtenido desde el receptor sensible el día 3 de noviembre de 2017, que corresponde a 53 dB(A) y la distancia lineal que existe entre la fuente de ruido y el receptor en donde se constató

31 Harris, Cyril, Manual para el control de ruido Instituto de estudios de administración local, Madrid, 1977. P. 74.

excedencia de la normativa, se obtuvo un radio del AI aproximado de 97 metros desde la fuente emisora.

91. En segundo término, se procedió entonces a interceptar dicha AI con la información de la cobertura georreferenciada de las manzanas censales³² del Censo 2017³³, para la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, con lo cual se obtuvo el número total de personas existentes en cada una de las intersecciones entre las manzanas censales y el AI, bajo el supuesto que la distribución de la población determinada para cada manzana censal es homogénea, tal como se presenta en la siguiente imagen:



Fuente: Elaboración propia en base a software QGIS 3.16.1 e información georreferenciada del Censo 2017.

92. A continuación, se presenta la información correspondiente a cada manzana censal del AI definida, indicando: ID correspondiente por manzana censal, ID definido para el presente procedimiento sancionatorio (ID PS), sus respectivas áreas totales y número de personas en cada manzana. Asimismo, se indica la cantidad estimada de personas que pudieron ser afectadas, determinada a partir de proporción del AI sobre el área total, bajo el supuesto que la distribución de la población determinada para cada manzana censal es homogénea.

Tabla N° 5: Distribución de la Población Correspondiente a Manzanas Censales.

IDPS	ID Manzana Censo	N° de Personas	Área aprox.(m²)	A. Afectada aprox. (m²)	% de Afectación aprox.	Afectados aprox.
M1	13101271001006	83	14692	626	4	4
M2	13101271001008	229	9747	2182	22	51
M3	13101271001010	142	9319	8072	87	123
M4	13101271001011	70	7514	7514	100	70
M5	13101271001012	172	6751	3341	49	85
M6	13101271001901	670	17595	835	5	32
M7	13101271002003	583	7284	823	11	66

³² Manzana censal: unidad geográfica básica con fines estadísticos que conforman zonas censales en áreas urbanas. Contiene un grupo de viviendas contiguas o separadas, edificios, establecimientos y/o predios, delimitados por rasgos geográficos, culturales y naturales.

³³ <http://www.censo2017.cl/servicio-de-mapas/>

IDPS	ID Manzana Censo	N° de Personas	Área aprox.(m²)	A. Afectada aprox. (m²)	% de Afectación aprox.	Afectados aprox.
M8	13101271002004	37	2916	876	30	11
M9	13101271002005	59	1720	14	1	0

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Censo 2017.

93. En consecuencia, de acuerdo a lo presentado en la tabla anterior, el número de personas que se estimó como potencialmente afectadas por la fuente emisora, que habitan en el *buffer* identificado como A1, es de **442 personas**.

94. Por lo tanto, la presente circunstancia será considerada en la determinación de la sanción específica aplicable a la infracción.

b.1.3 La importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental (letra i)

95. La importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental es una circunstancia que permite valorar la relevancia que un determinado incumplimiento ha significado para el sistema regulatorio ambiental, más allá de los efectos propios que la infracción ha podido generar. La valoración de esta circunstancia permite que la sanción cumpla adecuadamente su fin preventivo, y que se adecúe al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción.

96. Cada infracción cometida afecta la efectividad del sistema jurídico de protección ambiental, pero esta consecuencia negativa no tendrá siempre la misma seriedad, sino que dependerá de la norma específica que se ha incumplido, así como la manera en que ha sido incumplida. Al ponderar la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental se debe considerar aspectos como: el tipo de norma infringida, su rol dentro del esquema regulatorio ambiental, su objetivo ambiental y las características propias del incumplimiento que se ha cometido a la norma.

97. Dado que se trata de una circunstancia que se refiere a la importancia de la norma infringida y las características de su incumplimiento, concurre necesariamente en todos los casos en los cuales la infracción es configurada. Esto se diferencia de las circunstancias que se relacionan con los efectos de la infracción, las que pueden concurrir o no dependiendo de las características del caso.

98. En el presente caso la infracción cometida implica la vulneración de la norma de emisión de ruidos, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 38, del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, la cual tiene por objetivo “(...) *proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula (...)*”³⁴. Los niveles máximos de emisión de ruidos se establecen en términos del nivel de presión sonora corregido, medidos en el receptor sensible. Estos límites son diferenciados de acuerdo a la localización del receptor, según la clasificación por zonas establecida en la norma, así como por el horario en que la emisión se constata, distinguiendo horario diurno y nocturno.

³⁴ Artículo N° 1 del D.S. N° 38/2011 del MMA.

99. La relevancia de este instrumento para el sistema regulatorio ambiental chileno radica en que la emisión de niveles de presión sonora por sobre los límites establecidos en la norma vulnera el objetivo de protección a la salud de la población, de los riesgos propios de la contaminación acústica, encontrándose en todos los casos un receptor expuesto al ruido generado, ocasionándose un riesgo a la salud y potencialmente un detrimento en la calidad de vida de las personas expuestas. Cabe agregar, asimismo, que esta corresponde a la única norma que regula de forma general y a nivel nacional los niveles de ruido a los cuales se expone la comunidad, aplicándose a un gran número de actividades productivas, comerciales, de esparcimiento y de servicios, faenas constructivas y elementos de infraestructura, que generan emisiones de ruido.

100. En el mismo sentido, y tal como se indicó a propósito de la clasificación de la infracción en el presente procedimiento sancionatorio, solo fue posible constatar por medio del instrumental y metodologías establecidas en la norma de emisión, una ocasión de incumplimiento de la normativa.

101. La importancia de la vulneración a la norma en el caso concreto, se encuentra también determinada por una magnitud de excedencia de 3 decibeles por sobre el límite establecido en la norma en horario nocturno en Zona III, constatada durante la actividad de Fiscalización realizada el 3 de noviembre de 2017 y la cual fue motivo de la Formulación de Cargos asociada a la resolución Res. Ex. N°1/Rol D-121-2020. Cabe señalar, sin embargo, que, dado que la vulneración a la norma de ruidos se encuentra necesariamente asociada a la generación de un riesgo a la salud de las personas, la magnitud de la excedencia en términos de su consideración en el valor de seriedad de la infracción, ha sido ponderada en el marco de la letra a) del art. 40.

b.2. Factores de incremento

102. A continuación, se ponderarán aquellos factores que pueden aumentar el componente de afectación, y que han concurrido en la especie.

b.2.1. Falta de cooperación (letra i)

103. Esta circunstancia evalúa si el infractor ha realizado acciones que han dificultado el esclarecimiento de los hechos imputados, sus circunstancias o sus efectos, así como también la ponderación de otras circunstancias del artículo 40 de la LOSMA.

104. Algunas de las conductas que se consideran para valorar esta circunstancia son las siguientes: (i) El infractor no ha respondido un requerimiento o solicitud de información; (ii) El infractor ha proveído información incompleta, confusa, contradictoria, sobreabundante o manifiestamente errónea, ya sea presentada voluntariamente, en respuesta a un requerimiento o solicitud de información, o en el marco de una diligencia probatoria; (iii) El infractor no ha prestado facilidades o ha obstaculizado el desarrollo de una diligencia; (iv) El infractor ha realizado acciones impertinentes o manifiestamente dilatorias.

105. En el presente caso, el titular no acompañó documentos para dar respuesta a lo solicitado en el Resuelvo VIII de la Res. Ex. N°1/ Rol D-121-2020, en cuanto a:

- a) Identificar las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido dentro de la unidad fiscalizable.
- b) Plano simple que ilustre la ubicación de las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido. Asimismo, indicar la orientación y referencia con los puntos de medición de ruidos individualizados en las Fichas de Medición de Ruidos incorporadas en el informe DFZ-2017-6400-XIII-NE-IA, además de indicar las dimensiones del lugar.
- c) Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido, indicando expresamente el horario de inicio y término de su funcionamiento, así como los días de la semana en los que funciona.

106. En virtud de lo anterior, se configura la presente circunstancia del art. 40 de la LOSMA, para efectos de aumentar el monto del componente de afectación de la sanción a aplicar.

b.3. Factores de disminución

b.3.1. Cooperación eficaz (letra i)

107. Conforme al criterio sostenido por esta Superintendencia, para que esta circunstancia pueda ser ponderada en un procedimiento sancionatorio, es necesario que la cooperación brindada por el sujeto infractor sea eficaz, lo que guarda relación con la utilidad real de la información o antecedentes proporcionados por el mismo.

108. A su vez, tal como se ha expresado en las Bases Metodológicas, algunos de los elementos que se consideran para valorar esta circunstancia, son los siguientes: (i) el infractor se ha allanado al hecho imputado, su calificación, su clasificación de gravedad y/o sus efectos (dependiendo de sus alcances, el allanamiento podrá ser total o parcial); (ii) el infractor ha dado respuesta oportuna, íntegra y útil a los requerimientos y/o solicitudes de información formulados por la SMA, en los términos solicitados; (iii) el infractor ha prestado una colaboración útil y oportuna en las diligencias probatorias decretadas por la SMA; (iv) el infractor ha aportado antecedentes de forma útil y oportuna, que son conducentes al esclarecimiento de los hechos, sus circunstancias y/o efectos, o para la ponderación de otras circunstancias del artículo 40 de la LOSMA.

109. En el presente caso, cabe hacer presente que el titular acompañó los siguientes documentos, que dieron respuesta a lo requerido en los puntos 1 y 2 del Resuelvo VIII de la Res. Ex. N°1/ Rol D-121-2020:

- a) Reducción a Escritura Pública de Acta, Sesión de Directorio, "Instituto AIEP SpA.", de fecha 03 de agosto de 2020, otorgada ante Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, en la que consta la personería de los representantes del titular.
- b) Estados Financieros del titular al 31 de diciembre de 2019.

110. Que, adicionalmente, el titular respondió parcialmente el requerimiento del punto 5 del mismo Resuelvo señalado en el considerando anterior, esto es la indicación del horario de funcionamiento de la unidad fiscalizable, indicando que

ésta se encuentra en operación hasta las 22:30 horas, pero sin indicar el horario de inicio, ni los días de semana que se encuentra en funcionamiento.

111. En virtud de lo anterior, se configura la presente circunstancia del art. 40 de la LOSMA, para efectos de disminuir el componente de afectación de la sanción a aplicar.

b.3.2. Irreprochable conducta anterior (letra e)

112. La concurrencia de esta circunstancia es ponderada por la SMA en base al examen de los antecedentes disponibles que dan cuenta de la conducta que, en materia ambiental, ha sostenido en el pasado la unidad fiscalizable. Se entiende que el infractor tiene una irreprochable conducta anterior cuando no se encuentra en determinadas situaciones que permiten descartarla, entre las cuales se cuenta la conducta anterior negativa -en los términos descritos anteriormente-, entre otras situaciones señaladas en las Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales.

113. En el presente procedimiento sancionatorio no constan antecedentes que permitan descartar una conducta irreprochable anterior, por lo que esto **será considerado como una circunstancia que procede como un factor de disminución del componente de afectación para efectos de la sanción correspondiente a la infracción ya verificada.**

b.4. La capacidad económica del infractor (letra f)

114. La capacidad económica ha sido definida por la doctrina española, a propósito del Derecho Tributario, como la potencialidad económica vinculada a la titularidad y disponibilidad de la riqueza, con la aptitud, la posibilidad real, la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer frente a la exigencia de una obligación tributaria concreta por parte de la Administración Pública³⁵. De esta manera, la capacidad económica atiende a la proporcionalidad del monto de una multa con relación a la capacidad económica concreta del infractor.

115. Para la determinación de la capacidad económica de un infractor, esta Superintendencia considera dos criterios: tamaño económico y capacidad de pago. El tamaño económico se asocia al nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales del infractor, y normalmente es conocido por esta Superintendencia de forma previa a la aplicación de sanciones, lo cual permite su incorporación en la determinación de sanciones de forma general. Por otra parte, la capacidad de pago tiene relación con la situación financiera específica del infractor en el momento de la aplicación del conjunto de las sanciones pecuniarias determinadas para el caso bajo análisis de acuerdo a las reglas generales, la cual, normalmente no es conocida por esta Superintendencia de forma previa a la determinación de sanciones. Este aspecto es considerado de forma eventual, excepcional y a solicitud expresa del infractor una vez que tome conocimiento de las sanciones respectivas, debiendo proveer la información

³⁵ CALVO Ortega, Rafael, Curso de Derecho Financiero, I. Derecho Tributario, Parte General, 10ª edición, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, p. 52; citado por MASBERNAT Muñoz, Patricio, "El principio de capacidad económica como principio jurídico material de la tributación: su elaboración doctrinal y jurisprudencial en España" Revista Ius et Praxis, Año 16, Nº 1, 2010, pp. 303 - 332.

correspondiente para acreditar que efectivamente se encuentra en situación de dificultad financiera para hacer frente a estas.

116. Para la determinación del tamaño económico, se han examinado los antecedentes financieros de la empresa disponibles en el procedimiento. Así, de acuerdo a la información contenida en el documento “Instituto Profesional Aiep SpA Estados financieros al 31 de diciembre de 2019” presentado por el titular³⁶, se observa que Instituto Profesional Aiep Spa se sitúa en la clasificación **Grande 4** -de acuerdo a la clasificación de tamaño económico utilizada por el Servicio de Impuestos Internos- por presentar ingresos superiores a UF 1.000.000 en el año 2019. En efecto, se observa que sus ingresos en ese año fueron de \$135.950.262, equivalentes a UF 4.802.209, considerando el valor de la UF al día 31 de diciembre de 2019.

117. Como es de público conocimiento, el país se encuentra atravesando una crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Al respecto, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional, mediante D.S. N° 4, de 5 de enero de 2020. Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote de COVID-19 como una pandemia global. Luego, el 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, mediante el D.S. N° 104, de 18 de marzo de 2020, modificado luego por el D.S. N° 106 de 19 de marzo del mismo año. El estado de excepción constitucional de catástrofe fue prorrogado por el Ministerio del Interior mediante el D.S. N°72 de 11 de marzo de 2021.

118. Es un hecho público y notorio que el manejo sanitario de la pandemia de COVID-19 ha generado restricciones a los derechos de las personas. Estas restricciones significan, en adición a las consecuencias inherentes a la crisis sanitaria, un impacto económico significativo, al afectarse la operación tradicional de las empresas, situación que está afectando transversalmente a los distintos actores de la economía nacional, aunque con distinta intensidad según el tamaño económico o giro de los mismos.

119. Así las cosas, resulta necesario que esta Superintendencia considere los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 al ejercer su potestad sancionatoria, en particular en la ponderación del artículo 40, letra f) de la LOSMA, en atención a las consecuencias a que la circunstancia de la pandemia de COVID-19 ha tenido para el normal funcionamiento de las empresas

120. En el presente caso, la información más actualizada de los ingresos anuales de la empresa disponible por esta Superintendencia corresponde al año 2019 y, por lo tanto, esta no comprende los posibles efectos de la pandemia de COVID-19 referidos anteriormente.

121. Al respecto, para efectos de cuantificar el impacto de la crisis sanitaria en la actividad de los diferentes actores económicos, se tuvo a la vista la Segunda Encuesta a Empresas ante COVID-19, efectuada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile en el mes de abril de 2020³⁷, conforme a la cual es posible observar la capacidad de funcionamiento promedio de las empresas, según su tamaño, respecto de su

³⁶ Acompaño en documento de descargos.

³⁷ Disponible en <https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/04/Resultados-Segunda-Encuesta-Empresas-ante-COVID19-Abril.pdf>.

funcionamiento bajo condiciones normales. En base a una proyección de la capacidad de funcionamiento promedio por tamaño de empresa para el periodo abril-diciembre 2020, se establecieron factores de ponderación que tienen por objetivo incorporar los efectos de la crisis, los cuales, de acuerdo a la categoría de tamaño económico del infractor, resultan o no en una disminución adicional en el componente de afectación de la sanción³⁸.

122. En base a lo descrito anteriormente, al tratarse de una empresa categorizada como Grande 4, se concluye que no procede la aplicación de un ajuste para la disminución del componente de afectación de la sanción que corresponda aplicar a la infracción, asociado a la circunstancia de capacidad económica.

123. En virtud de lo anteriormente expuesto, estese a lo que resolverá este Superintendente.

RESUELVO:

PRIMERO: Atendido lo expuesto en la presente resolución, respecto al hecho infraccional consistente en *“La obtención, con fecha 03 de noviembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 53 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona III”,* que generó el incumplimiento del D.S. N.º 38/2011, **aplíquese a Instituto Profesional AIEP SpA , RUT N° 96.621.640-9, titular de Instituto Profesional AIEP – Sede Barrio Universitario, Edificio Abdón Cifuentes en diecisiete Unidades Tributarias Anuales (17 UTA).**

SEGUNDO: Recursos que proceden contra esta resolución y beneficio del inciso final del artículo 56 de la LOSMA. De conformidad a lo establecido en el párrafo 4° de los Recursos de la LOSMA, en contra la presente resolución procede el recurso de reposición, en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución, según lo dispone el artículo 55 de la misma Ley. La interposición de este recurso suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad, siempre que se trate de materia por las cuales procede dicho recurso.

Asimismo, ante la presente resolución procede el reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la resolución, según lo establecido en el artículo 56, en cuyo caso, no será exigible el pago mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

Para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las resoluciones de la Superintendencia que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la resolución, **se le reducirá un 25% del valor de la multa.** Dicho pago deberá ser acreditado en el plazo señalado, presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería General de la República.

³⁸ Disminución adicional al ajuste que corresponde según los ingresos anuales del año 2019.

TERCERO: Del pago de las sanciones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la LOSMA, las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tienen mérito ejecutivo.

El monto de la multa impuesta por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución sancionatoria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 ya citado. El pago de la multa deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario. Para mayores detalles, puede consultarse el siguiente link: <https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/pago-de-multas/>.

Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

CUARTO: De la prescripción de la sanción. Las sanciones administrativas aplicadas de conformidad a esta ley prescribirán a los tres años desde la fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado a firme. Esta prescripción se interrumpirá por la notificación del respectivo procedimiento de ejecución o de la formulación de cargos por incumplimiento, según la naturaleza de la sanción aplicada.

QUINTO: Consignación de la sanción en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. En virtud de lo establecido en el artículo 58 de la LOSMA y en el Decreto Supremo N°31 del Ministerio del Medio Ambiente, del 20 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial el día lunes 11 de febrero de 2013, que establece el Reglamento del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, y de los Registros Públicos de Resoluciones de Calificación Ambiental y de Sanciones; se instruye que una vez que la presente resolución sancionatoria quede a firme, se proceda a formular la anotación respectiva en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, en los términos establecidos en los artículos 17 y siguientes del Reglamento.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PTB/CSS

Notificación por correo electrónico:

- Eduardo Estrada Bayo y Patricia Cabello Pedrasa, ambos en representación de **Instituto Profesional AIEP SpA:**
rodrigo.nunez@aiep.cl y valeria.olivares@aiep.cl

Notificación carta certificada:

- Javier Antonio Meneses Pontigo, domiciliado en calle Echaurren N°129, departamento N°131, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago

C.C.

- Gabinete, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Fiscal, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Departamento de Sanción y Cumplimiento, Fiscalía, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Departamento Jurídico, Fiscalía, Superintendencia del Medio Ambiente
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente.
- División de Seguimiento e Información Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Oficina de Partes, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Equipo sancionatorios, Superintendencia de Medio Ambiente

Rol D-121-2020

Expediente cero papel: N° 22379/2020



Código: 1623189091442
verificar validez en
<https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp>